

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 209/01	Tipo de cambio del euro	1
2003/C 209/02	Ayudas estatales — Bélgica — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 26/03 (ex N 351/02) — Modificación del régimen de los centros de coordinación ⁽¹⁾	2
2003/C 209/03	Ayuda estatal — España — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 47/03 (ex NN 49/03) — España — Garantías de entrega para tres gaseros destinados al transporte de gas natural licuado (GNL) ⁽¹⁾	24
2003/C 209/04	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ⁽¹⁾	29
	<i>II Actos jurídicos preparatorios</i>	
		
	<i>III Informaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 209/05	Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en línea (2003 a 2004) (Plan de acción para una Internet más segura) ⁽¹⁾	30

Número de información

Sumario (*continuación*)

Página

Corrección de errores

2003/C 209/06

Explotación de servicios aéreos regulares — Concurso concerniente a la explotación de servicios aéreos regulares entre Brive (Laroche) y París (Orly) («Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas» n° C 201 de 26.8.2003 y S 162 de 26.8.2003, 148409-2003) ⁽¹⁾ 33

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

3 de septiembre de 2003

(2003/C 209/01)

1 euro =

Moneda			Moneda		
		Tipo de cambio			Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,0783	LVL	lats letón	0,625
JPY	yen japonés	125,4	MTL	lira maltesa	0,4241
DKK	corona danesa	7,4257	PLN	zloty polaco	4,3467
GBP	libra esterlina	0,69	ROL	leu rumano	37 283
SEK	corona sueca	9,149	SIT	tólar esloveno	235,035
CHF	franco suizo	1,5318	SKK	corona eslovaca	41,935
ISK	corona islandesa	88,42	TRL	lira turca	1 503 000
NOK	corona noruega	8,235	AUD	dólar australiano	1,6938
BGN	lev búlgaro	1,9469	CAD	dólar canadiense	1,5051
CYP	libra chipriota	0,58312	HKD	dólar de Hong Kong	8,4092
CZK	corona checa	32,39	NZD	dólar neozelandés	1,9079
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,896
HUF	forint húngaro	256,88	KRW	won de Corea del Sur	1 265,92
LTL	litas lituana	3,4533	ZAR	rand sudafricano	7,8866

⁽¹⁾ Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

AYUDAS ESTATALES — BÉLGICA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 26/03 (ex N 351/02) — Modificación del régimen de los centros de coordinación

(2003/C 209/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 23 de abril de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una parte de la medida antes citada.

La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otras medidas, descritas en la carta que sigue al presente resumen.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de Ayudas Estatales
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**Procedimiento**

De acuerdo con el artículo 88 del Tratado, Bélgica notificó, por carta de 16 de mayo de 2002, la parte de un anteproyecto de ley relativa a la modificación del Decreto Real n° 187. Se trata pues de un nuevo régimen de los centros de coordinación, destinado a sustituir el régimen vigente desde 1983. La ley ⁽¹⁾ se adoptó el 24 de diciembre de 2002. Según el artículo 32 de la ley, la fecha de entrada en vigor del nuevo texto del Decreto Real n° 187 se fijará posteriormente por decreto real.

Descripción detallada de la medida

El régimen de los centros de coordinación se estableció en virtud del Decreto Real n° 187, de 30 de diciembre de 1982. Ha sido completado y modificado en sucesivas ocasiones ⁽²⁾. El artículo 29 de la ley de 24 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, «la ley») aporta nuevas modificaciones al régimen. Tras la entrada en vigor de estas modificaciones, el régimen presentará las siguientes características.

El beneficio del régimen se concede exclusivamente a los centros previa e individualmente autorizados por Decreto Real. Para obtener esta autorización, el centro debe formar parte de un grupo multinacional que cumpla determinados criterios de tamaño. El centro de coordinación debe tener por único objeto el desarrollo y la centralización, en exclusivo beneficio de la totalidad o una parte de las empresas del grupo, de una o más actividades de carácter preparatorio o auxiliar autorizadas por la ley ⁽³⁾. La autorización se concede al centro por un período de 10 años renovable. La ley prevé determinadas condiciones en las que la autorización no es o deja de ser válida.

Como excepción al régimen fiscal de Derecho común, el beneficio de los centros de coordinación se determina según el método denominado de «cost plus». Todos los costes soportados por los centros de coordinación se tienen en cuenta para la determinación del beneficio imponible por el método «cost plus». Los márgenes utilizados en el método «cost plus» se determinan caso por caso, en función de las actividades ejercidas por el centro de coordinación. Estos márgenes pueden

⁽¹⁾ Ley por la que se modifica el régimen de sociedades en materia del impuesto sobre la renta y se instituye un sistema de decisión anticipada en materia fiscal — Moniteur Belge de 31 de diciembre de 2002 (Ed 2), p. 58817 y siguientes.

⁽²⁾ Ley de 27 de diciembre de 1984, Ley de 4 de agosto de 1986, Decreto Real de 3 de noviembre de 1986, Ley de 28 de diciembre de 1990, Ley de 23 de octubre de 1991, y Ley de 4 de abril de 1995.

⁽³⁾ Operaciones financieras y cobertura de los riesgos que se derivan de los cambios y fluctuaciones de los tipos de interés; seguro y gestión de riesgos; investigación científica; relaciones no comerciales con las autoridades nacionales e internacionales; operaciones en el ámbito de la contabilidad y la administración; operaciones en el ámbito de la informática; publicidad y comercialización; suministro y recogida de información y asistencia a la gestión; operaciones de compra; cualquier otra actividad que tenga un carácter preparatorio o auxiliar para las empresas del grupo.

fijarse en el marco de decisiones anticipadas por la Administración fiscal. La validez de estas decisiones no puede sobrepasar los cinco años. El contenido de estas decisiones puede revisarse si cambian las condiciones que han conducido a la determinación de los tipos de margen. Los centros de coordinación pueden, en determinadas condiciones, quedar exentos del impuesto sobre los bienes mobiliarios y del derecho de registro proporcional sobre las aportaciones y aumentos de capital estatutario.

Evaluación de la medida

En la medida en que las modalidades de determinación del beneficio en el marco del método «cost plus» tienen en cuenta todos los costes soportados por los centros de coordinación, y dado que los márgenes se fijan caso por caso en función de las actividades ejercidas por la empresa, la Comisión estima que estos elementos no constituyen ayudas estatales en el sentido definido en el apartado 1 del artículo 87 CE.

En cambio, la Comisión considera en esta fase que las exenciones de que se benefician exclusivamente los centros en materia de ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido, así como en materia de exoneración del impuesto sobre los bienes mobiliarios y de los derechos de aportación de capital, satisfacen acumulativamente los cuatro criterios característicos de un régimen de ayudas, tales como éstas aparecen definidas en el apartado 1 del artículo 87 CE. En primer lugar, estas medidas de exención parecen ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligera las cargas que, por regla general, gravan el presupuesto de las empresas. Se trata en efecto de impuestos normalmente soportados por las sociedades que perciben en Bélgica ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido, o rentas mobiliarias, o que realizan aportaciones.

En segundo lugar, la Comisión constata que estas ventajas pueden financiarse mediante ingresos del Estado en la medida en que éste renunciaría así a percibir dichos impuestos. En tercer lugar, la Comisión constata que a estas ventajas sólo pueden acceder los centros de coordinación autorizados en el marco de la ley, lo que las convierte en medidas selectivas. Por último, la Comisión considera en esta fase que estos centros, así como los grupos a los que pertenecen, pueden operar en ámbitos en los que existe un intenso comercio intracomunitario. Así pues, no se puede descartar la posibilidad de que afecten a los intercambios y a la competencia.

En la medida en que los elementos de ayuda identificados no están vinculados a la realización de inversiones, ni están limitados en cuanto a su importe, la Comisión considera en esta fase que se trata de ayudas al funcionamiento. Actualmente, la Comisión sólo autoriza este tipo de ayudas, en circunstancias excepcionales, en las regiones que pueden acogerse a la excepción contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y bajo condiciones muy estrictas. Dado que Bélgica no puede acogerse a dicha excepción, la Comisión expresa sus dudas en cuanto a la compatibilidad de este régimen con el mercado común.

CARTA

«Met dit schrijven stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlichtingen, het volgende heeft besloten. Enerzijds heeft zij beslist geen bezwaar te maken tegen de forfaitaire regeling voor de vaststelling van de belastbare inkomsten van de coördinatiecentra (hierna te noemen „de centra”), met uitzondering van de behandeling van abnormale en goedgunstige voordelen; anderzijds heeft zij besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van de behandeling van de abnormale en goedgunstige voordelen die aan de centra worden verleend wanneer deze voordelen niet vooraf zijn belast ten name van de vennootschappen die hen toekennen, alsmede ten aanzien van de vrijstellingen van de roerende voorheffing en het registratierecht op kapitaalbrengen (hierna te noemen „het kapitaalrecht”) waarin het nieuwe artikel 5, lid 4, van koninklijk besluit nr. 187 voorziet.

I. PROCEDURE

- (1) Op 1 december 1997 heeft de Raad een gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen ⁽¹⁾ vastgesteld en de Commissie tevens verzocht de in de lidstaten geldende belastingregelingen (opnieuw) te onderzoeken. Op 11 november 1998 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een mededeling over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen ⁽²⁾ (hierna te noemen „de mededeling”).
- (2) Koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 voorziet in een van het gemeen recht afwijkende regeling voor erkende coördinatiecentra. In het kader van de werkzaamheden van de groep gedragscode werd deze regeling aangemerkt als een maatregel die schadelijke belastingconcurrentie veroorzaakt. Op 27 februari 2002 had de Commissie tevens een formele onderzoekprocedure ten aanzien van deze regeling ingeleid. Deze procedure is op 17 februari 2003 afgesloten met een negatieve eindbeschikking.
- (3) Conform artikel 88 van het EG-Verdrag heeft België bij brief van 16 mei 2002 het deel van de tekst van een voorontwerp van wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 187 meegedeeld waarmee werd beoogd dit besluit in overeenstemming te brengen met de door de groep gedragscode van de Raad vastgestelde criteria. Het gaat derhalve om een nieuwe regeling voor coördinatiecentra ter vervanging van de sedert 1983 vigerende regeling, waarvan de voordelen sinds 17 februari 2003 niet meer mogen worden toegekend. De wet ⁽³⁾ is aangenomen op 24 december 2002. In artikel 32 van de wet is bepaald dat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tekst van koninklijk besluit nr. 187 later bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld.

⁽¹⁾ Document bekendgemaakt in *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen* (PB C 2 van 6.1.1998).

⁽²⁾ PB C 384 van 10.12.1998.

⁽³⁾ Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken — Belgisch Staatsblad van 31 december 2002 (Ed. 2), blz. 58817 e.v.

- (4) Bij brieven van 18 juli en 8 november 2002 heeft de Commissie om aanvullende inlichtingen verzocht. Deze werden haar verstrekt bij brieven van de permanente vertegenwoordiging van respectievelijk 11 september en 16 december 2002. Tijdens de vergadering van 13 december 2002 tussen de vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Commissie werd om nadere preciseringen verzocht. De permanente vertegenwoordiging van België heeft deze preciseringen verstrekt bij brief van 4 februari 2003, die de Commissie op 10 februari heeft ontvangen.
- (5) Op 17 februari 2003 heeft de Commissie de formele onderzoekprocedure afgesloten die zij bij brief van 27 februari 2002 ⁽⁴⁾ ten aanzien van de regeling voor coördinatiecentra had ingeleid. In de eindbeschikking van de Commissie worden de diverse vrijstellingen van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het kapitaalrecht welke uitsluitend aan erkende coördinatiecentra worden verleend, beschouwd als bestaande steun die onverenigbaar is met de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag. Tevens wordt de toepassing van de forfaitaire methode van het „cost plus”-type voor de vaststelling van de belastinggrondslag van dergelijke centra vanwege de specifieke kenmerken ervan als onverenigbare bestaande steun aangemerkt. België is bij brief van 17 februari 2003 ⁽⁵⁾ van deze beschikking in kennis gesteld. De verlening of instandhouding van het uit deze steun voortvloeiende voordeel is onrechtmatig vanaf 17 februari 2003, de datum waarop de eindbeschikking is gegeven.

II. GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

II.1. Rechtsgrond

- (6) De regeling voor coördinatiecentra vindt haar oorsprong in koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982. Dit koninklijk besluit is aangevuld bij de wet van 11 april 1983, het koninklijk besluit van 20 december 1984 en de wet van 28 december 1992, en tevens herhaaldelijk gewijzigd ⁽⁶⁾.
- (7) Artikel 29 van de wet van 24 december 2002 (hierna te noemen „de wet”) brengt nieuwe wijzigingen in de regeling aan. Na de inwerkingtreding van deze wijzigingen zal de regeling de hierna beschreven kenmerken vertonen.

II.2. Voorwaarden

- (8) Net als in het verleden komt een coördinatiecentrum pas voor de regeling in aanmerking na voorafgaande en individuele erkenning bij koninklijk besluit. Om te worden erkend, moet het centrum deel uitmaken van een groep die een multinationaal karakter heeft, over een kapitaal en reserves beschikken waarvan het geconsolideerde bedrag ten minste 24 miljoen EUR bereikt en een jaaromzet behalen waarvan het geconsolideerde bedrag gelijk is

aan of groter is dan 240 miljoen EUR. De criteria aan de hand waarvan het multinationale karakter van de groep wordt bepaald, zullen later bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Het coördinatiecentrum moet als enig doel hebben de ontwikkeling en de centralisering van één of meer bij de wet toegestane activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter ⁽⁷⁾, welke uitsluitend in het voordeel van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep worden uitgeoefend. Ondernemingen uit de financiële sector (kredietverschaffers, banken, verzekeringen) komen niet voor deze regeling in aanmerking. Het coördinatiecentrum mag geen aandelen of andere maatschappelijke rechten in om het even welke vennootschappen bezitten, behalve in het kader van de plaatsing van liquiditeiten. Ten slotte moeten de centra in België tenminste het equivalent van tien voltijdse werknemers in dienst hebben nadat zij twee jaar werkzaam zijn geweest.

- (9) De erkenning wordt aan het centrum verleend met ingang van het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot erkenning is ingediend tot bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat afgesloten wordt tijdens het tiende kalenderjaar na dat waarin de aanvraag werd ingediend. Mits nog steeds aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en daartoe bij de Federale Overheidsdienst Financiën een aanvraag wordt ingediend, kan de erkenning door die dienst worden hernieuwd, op voorwaarde dat daarmee wordt ingestemd door de minister van Financiën, de minister van Economie, de minister van Tewerkstelling en Arbeid en door de minister belast met Middenstand. De wet bepaalt tevens dat de erkenning ophoudt uitwerking te hebben voordat de aangevangen termijn van tien jaar is verstreken indien de instanties van de Europese Gemeenschappen definitief beslissen dat de huidige regeling voor coördinatiecentra moet worden opgeheven. De erkenning is tevens van rechtswege opgeheven met ingang van het belastbaar tijdperk waarin het centrum niet meer aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. Dit is met name het geval wanneer het centrum activiteiten uitoefent welke niet zijn vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit waarbij het werd erkend of in het besluit waarbij de erkenning werd hernieuwd.

II.3. Bijzondere bepalingen

- (10) In afwijking van de belastingregeling volgens het gemeen recht ⁽⁸⁾ bepaalt koninklijk besluit nr. 187 in zijn nieuwe vorm dat het belastbare inkomen van de erkende coördinatiecentra forfaitair wordt vastgesteld en overeenkomt met een percentage van het bedrag van de uitgaven en de bedrijfskosten (de zogeheten „cost plus”-methode). Deze methode wordt in de praktijk voor elk centrum

⁽⁴⁾ Brief SG(2002) D/228734, bekendgemaakt in PB C 147 van 20 juni 2002.

⁽⁵⁾ Het referentienummer van de eindbeschikking van 17 februari 2003 is C(2003) 564 def.; het referentienummer van de brief van 17 februari 2003 waarbij België van deze beschikking in kennis is gesteld, is SG(2003)*D/228522 (nog niet gepubliceerd).

⁽⁶⁾ Wet van 27 december 1984, wet van 4 augustus 1986, koninklijk besluit van 3 november 1986, wet van 28 december 1990, wet van 23 oktober 1991 en wet van 4 april 1995.

⁽⁷⁾ Financiële transacties en dekking van de risico's die voortvloeien uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, verzekering en risicobeheer, wetenschappelijk onderzoek, niet-commerciële betrekkingen met nationale en internationale overheden, werkzaamheden op het gebied van boekhouding en administratie, werkzaamheden op het gebied van informatica, reclame en marketing, informatieverstrekking en -verzameling en beheersbijstand, inkoopactiviteiten, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

⁽⁸⁾ Hiermee wordt het geheel van regels bedoeld die algemeen toepasbaar zijn voor de berekening van de belasting op binnen- of buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn.

op verschillende wijze toegepast volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld bij voorafgaande beslissing van de Federale Overheidsdienst Financiën (zie de punten 19 tot en met 22).

- (11) De kostenbasis omvat alle lasten van het centrum, met uitzondering van de belastingen. Occasionële uitgaven die voor rekening van vennootschappen van de groep zijn verricht en die rechtstreeks door de dienstverlener aan deze vennootschappen hadden kunnen worden gefactureerd, kunnen eveneens uit de „cost plus”-grondslag worden geweerd. Het betreft hier de strikte toepassing van een beginsel uit het jaarrekeningenrecht dat op alle vennootschappen van toepassing is.
- (12) Voor elke activiteit wordt een winstmarge vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de voorwaarden waaronder elk centrum de betrokken activiteit uitoefent. België heeft zich ertoe verbonden de belastingmethode aan te passen aan bepaalde activiteiten waaraan weinig of geen kosten verbonden zijn, zoals met name het bijzondere geval van de leningen die de centra uit hun eigen vermogen verstrekken. De percentages voor de winstmarge worden vastgesteld overeenkomstig de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) neergelegde beginselen, zodat voor elk centrum een belastbaar inkomen wordt verkregen dat vergelijkbaar is met datgene dat zou worden verkregen door middel van de klassieke methode (verschil tussen baten en lasten) wanneer dienstverlener en cliënt onafhankelijk zijn van elkaar. Het percentage wordt vastgesteld bij voorafgaande beslissing (zie punt 19) van de Federale Overheidsdienst Financiën⁽⁹⁾, die rekening houdt met de economische en juridische voorwaarden waaronder het centrum zijn activiteiten binnen de groep uitoefent.
- (13) De uitgaven of lasten die niet aftrekbaar zijn als beroepskosten (hierna te noemen „niet in aanmerking komende uitgaven”) worden niet meer systematisch bij de volgens de „cost plus”-methode berekende inkomsten gevoegd. De Belgische autoriteiten hebben evenwel bevestigd dat het voor elke activiteit van het centrum gehanteerde percentage voor de winstmarge zodanig zal worden vastgesteld dat het een normale situatie weerspiegelt, rekening houdend met de feitelijke en juridische omstandigheden waarin het centrum zich bevindt. Dat betekent dat wanneer er in een bepaalde economische sector van niet in aanmerking komende uitgaven sprake is en dit tot gevolg heeft dat de centra een belastingvoordeel genieten ten opzichte van ondernemingen uit dezelfde sector waarop de klassieke methode („verschil tussen baten en lasten”) van toepassing is, het „cost plus”-percentage per geval zal worden aangepast.
- (14) Ook de abnormale of goedgunstige voordelen⁽¹⁰⁾ die door de leden van de groep aan het centrum worden verleend, worden in beginsel niet aan de volgens de „cost plus”-methode berekende belastinggrondslag toegevoegd. Volgens de Belgische autoriteiten mogen deze voordelen niet bij de belastinggrondslag van het centrum worden gevoegd, aangezien de bevoegde controlediensten opdracht hebben ge-

kregen spontaan inlichtingen met buitenlandse belastingautoriteiten uit te wisselen wanneer wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd ten nadele van de fiscus van andere staten. Bovendien maken de op de uitwisseling van inlichtingen betrekking hebbende bepalingen van de door België gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen⁽¹¹⁾ en van Verdrag 90/436/EEG van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen⁽¹²⁾ het eveneens mogelijk de problemen in verband met de verrekenprijzen op te lossen.

- (15) De belastbare winst van het coördinatiecentrum mag echter niet lager zijn dan het bedrag van de alternatieve grondslag, dat gelijk is aan het totaal van 1) de niet in aanmerking komende uitgaven — exclusief belastingen — en 2) de abnormale of goedgunstige voordelen die door de leden van de groep aan het centrum worden verleend.
- (16) De winst van de coördinatiecentra wordt belast tegen het volle tarief van de vennootschapsbelasting.
- (17) Bij wet van 28 december 1992 werd met ingang van 1 januari 1993 een jaarlijkse belasting op de coördinatiecentra ingevoerd, die werd vastgesteld op 10 000 EUR per voltijdse werknemer van een centrum, maar niet hoger kan zijn dan 100 000 EUR per centrum. Er wordt een belastingkrediet toegekend waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de betaalde jaarlijkse belasting. Dat belastingkrediet wordt verrekend met de vennootschapsbelasting en het eventueel teveel betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.
- (18) Afgezien van de bovenbeschreven forfaitaire berekening zijn de volgende vrijstellingen op de centra van toepassing:
1. wanneer de begunstigde geïdentificeerd kan worden als niet zijnde een natuurlijk persoon, een rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of een buitenlandse rechtspersoon, is het centrum geen roerende voorheffing verschuldigd, noch met betrekking tot de uitgekeerde dividenden, noch met betrekking tot de inkomsten van schuldvorderingen of leningen, noch met betrekking tot de opbrengsten van de concessie van immateriële roerende goederen die hij verschuldigd is;
 2. het evenredig registratierecht is niet verschuldigd ter zake van de inbrengen in en de vermeederingsen van het statutair kapitaal zonder nieuwe inbreng, van dat centrum.

Volgens de Belgische autoriteiten gaat het om vrijstellingen die reeds bij artikel 29, eerste alinea, leden 2 en 3, van de wet van 11 april 1984 waren ingevoerd. Aangezien alleen beide bovenbeschreven vrijstellingen gehandhaafd blijven, zijn deze ter wille van de samenhang en de leesbaarheid in koninklijk besluit nr. 187 overgenomen.

⁽⁹⁾ Voormalig ministerie van Financiën.

⁽¹⁰⁾ Het in artikel 26 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 gehanteerde begrip „abnormale of goedgunstige voordelen” wordt verduidelijkt in nummer 26/16 van het Commentaar van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (Com.IB 1992).

⁽¹¹⁾ PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15.

⁽¹²⁾ PB L 225 van 20.8.1990, blz. 10.

II.4. Voorafgaande beslissing

- (19) Zoals bij de beschrijving van de regeling is aangegeven, worden de voor elk centrum geldende parameters van de „cost plus”-methode bij voorafgaande beslissing vastgesteld (zie punt 12). Onder voorafgaande beslissing moet worden verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen, vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft gehad. De voorafgaande beslissing mag geen vrijstelling of vermindering van belasting tot gevolg hebben.
- (20) De voorafgaande beslissing wordt getroffen op aanvraag. De aanvraag moet de volgende elementen bevatten: de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, van de betrokken partijen en derden, de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager, de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting en de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. De aanvraag bevat, in voorkomend geval, ook een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden ingediend bij de fiscale overheden van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen of van derde staten waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragen.
- (21) Voorafgaande beslissingen worden getroffen voor een termijn van vijf jaar. Krachtens artikel 23 van de wet van 24 december 2002 binden voorafgaande beslissingen de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve:
1. indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;
 2. indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;
 3. in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het Gemeenschapsrecht of van het interne recht die van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;
 4. indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het Gemeenschapsrecht of van het interne recht.
- Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende elementen die direct of indirect aan de aanvrager toe te schrijven zijn. In dat geval heeft de intrekking van de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.
- (22) Voorafgaande beslissingen worden op anonieme wijze gepubliceerd, met inachtneming van de bepalingen inzake het beroepsgeheim.

III. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL

III.1. Steunkarakter van de maatregelen: toepasselijkheid van artikel 87, lid 1, van het Verdrag

- (23) Zoals in de aanhef van deze beschikking is uiteengezet, verschilt de beoordeling door de Commissie van de aangeelde regeling al naargelang het gaat om, enerzijds, het beginsel van de voorafgaande erkenning en het treffen van voorafgaande beslissingen, en, anderzijds, de (niet-)inaanmerkingneming van de aan de centra toegekende abnormale en goedgunstige voordelen bij de toepassing van de „cost plus”-methode en de vrijstellingen van de roerende voorheffing en het kapitaalrecht.
- (24) Om als een steunmaatregel te worden beschouwd, moet een maatregel tegelijk voldoen aan elk van de volgende, in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vastgelegde criteria die kenmerkend zijn voor een steunregeling: 1) de maatregel moet een voordeel verlenen dat de lasten verlicht die ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen; 2) dit voordeel moet met staatsmiddelen worden bekostigd; 3) de maatregel moet de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden; en 4) de maatregel moet specifiek of selectief zijn, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigt.

III.1.1. Erkenningen en voorafgaande beslissingen

- (25) De Commissie is van mening dat in principe noch erkenningen, noch voorafgaande beslissingen op zich een bron van economische voordelen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag vormen. De individuele erkenning van een centrum geschiedt op aanvraag. De erkenning vormt slechts de bevestiging, na verificatie door de belastingadministratie, dat alle bij de wet gestelde voorwaarden zijn vervuld opdat het betrokken centrum kan profiteren van de uitzonderingsregeling die de wet uitsluitend voor erkende centra reserveert. Het gaat derhalve om een louter vaststelling van de feiten, waarbij het recht op de gebruikmaking van de eventueel bij wet vastgestelde bijzondere regeling wordt erkend, maar waarbij niet wordt verwezen naar de inhoud van de betrokken regeling. De erkenning op zich geeft derhalve geen recht op een gunstiger regeling dan die welke op andere in België gevestigde vennootschappen van toepassing is. Hoewel de erkenning voor tien jaar geldig is, geeft zij evenmin recht op een onveranderlijke behandeling gedurende deze periode. De erkenning verleent bijgevolg geen enkel economisch voordeel. Op dezelfde manier verhoogt een voorafgaande beslissing van de belastingadministratie over de wijze waarop een regel uit het belastingrecht in de bijzondere situatie van een onderneming zal worden toegepast, de rechtszekerheid van de betrokken onderneming, maar verleent zij op zich geen economisch voordeel. De wet bepaalt trouwens dat een voorafgaande beslissing geen vrijstelling of vermindering van belasting tot gevolg mag hebben. In dat verband attendeert de Commissie op artikel 23 van de wet, waarin wordt bepaald dat elke voorafgaande beslissing nietig is wanneer deze van meet af aan dan wel tijdens haar geldigheidsduur als gevolg van de wijziging van essentiële elementen ervan resulteert in een — niet in overeenstemming met het Belgische interne recht zijnde — belastingvermindering of in een economisch voordeel dat de vorm aanneemt van — met het Gemeenschapsrecht onverenigbare — staatssteun.

- (26) Het eventuele economische voordeel zou derhalve kunnen voortvloeien uit de belastingmaatregel die de administratie interpreteert, of zelfs uit de interpretatie zelf. In het onderhavige geval zal het eventuele voordeel voortvloeien uit hetzij de regelgeving (wetten, besluiten, circulaires enz.) betreffende de regeling voor coördinatiecentra, hetzij de toepassingsbepalingen ervan, d.w.z. de uitlegging die in het kader van specifieke voorafgaande beslissingen aan deze regelgeving wordt gegeven.

III.1.2. *Forfaitaire vaststelling van de belastbare inkomsten („cost plus”)*

- (27) Wat de nieuwe „cost plus”-regeling betreft, kan de toepassing van een alternatieve belastingmethode⁽¹³⁾ (in dit geval een berekeningsmethode van het „cost plus”-type), met name in het kader van handelstransacties binnen eenzelfde groep, gerechtvaardigd zijn om erop toe te zien dat deze transacties volgens het beginsel van de volledige mededinging plaatsvinden. In het onderhavige geval is de Commissie van oordeel dat de naleving van de beginselen die in de wet van 24 december 2002 zijn neergelegd — of die België heeft toegezegd te zullen respecteren —, waarborgen dat de uitzonderingsregeling ten doel heeft voor elk centrum en voor elk belastbaar tijdperk een belastinggrondslag vast te stellen die vergelijkbaar is met die welke bij volkomen concurrentie verkregen zou zijn als gevolg van de toepassing van de belastingregels van gemeen recht.
- (28) De Commissie merkt meer in het bijzonder op dat deze nieuwe „cost plus”-regeling op de volgende essentiële punten verschilt van de oude regeling, die op 17 februari 2003 onverenigbaar is verklaard door de Commissie. In de eerste plaats omvat de kostenbasis in het kader van de nieuwe „cost plus”-regeling alle kosten van het centrum. Ten tweede worden de marges en andere voorwaarden — die voortaan bij voorafgaande beslissing worden vastgesteld — bepaald en aangepast naar gelang van de specifieke kenmerken van elke activiteit en van het betrokken centrum (zie de punten 10 tot en met 13), zodat, in overeenstemming met de OESO-regels, verrekenprijzen „at arm's length” worden gewaarborgd. Zo is in correctie-maatregelen voorzien, met name om rekening te houden met het bestaan van niet in aanmerking komende uitgaven of met de geringe kosten die aan de uitoefening van bepaalde activiteiten verbonden zijn, en om steeds een belastinggrondslag te verkrijgen die vergelijkbaar is met die welke bij volkomen concurrentie verkregen zou zijn als gevolg van de toepassing van de belastingregels van gemeen recht.
- (29) Ten slotte merkt de Commissie in verband met artikel 23, tweede alinea, 1, van de wet op (zie punt 21) dat om een belastingheffing te realiseren die vergelijkbaar is met die welke volgens de traditionele methode verkregen zou zijn, in het kader van de voorafgaande beslissingen indien nodig bepaalde voorwaarden kunnen worden gesteld die op straffe van nietigheid moeten worden nageleefd. De Com-

missie meent tevens te begrijpen dat voorafgaande beslissingen met name niet of niet meer geldig zijn indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze of indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, het Gemeenschapsrecht of het interne recht. De Commissie interpreteert deze bepalingen derhalve in die zin dat zij de nietigheid garanderen van voorafgaande beslissingen wanneer deze beslissingen van meet af aan dan wel tijdens de geldigheidsduur ervan resulteren in een — niet in overeenstemming met het Belgische interne recht zijnde — belastingvermindering of in een economisch voordeel dat de vorm aanneemt van — met het Gemeenschapsrecht onverenigbare — staatssteun. Volgens de Commissie impliceert artikel 23 derhalve onder meer dat een bij voorafgaande beslissing vastgesteld percentage voor de winstmarge moet worden herzien wanneer dit percentage nadien verandert en niet meer aansluit bij de voorwaarden die bij vrije mededinging in de referentiesector gelden. De Commissie meent ten slotte te begrijpen dat artikel 23 de mogelijkheid biedt de percentages bij te stellen indien het handhaven ervan een voordeel voor het centrum zou inhouden, ongeacht wat de oorzaak van het voordeel is.

- (30) De Commissie is tevens ingenomen met de systematische bekendmaking van de voorafgaande beslissingen (zie punt 22), omdat zulks de transparantie van de regeling zal vergroten, met name wat het voor elke activiteit van het centrum vastgestelde percentage voor de winstmarge betreft.
- (31) Om die redenen en op grond van haar interpretatie van artikel 23 van de wet komt de Commissie tot de conclusie dat er geen economisch voordeel wordt verleend wanneer deze beginselen strikt worden toegepast. Aangezien een van de criteria van artikel 87 van het EG-Verdrag niet is vervuld, is dit deel van de nieuwe regeling voor coördinatiecentra derhalve geen steunmaatregel van de staten in de zin van genoemd artikel.
- (32) De Commissie preciseert evenwel dat deze beoordeling geldt voor de regeling zoals zij door de Belgische autoriteiten is voorgesteld — rekening houdend met de regels voor het treffen van de voorafgaande beslissingen —, en gebaseerd is op de veronderstelling dat België de aange-gane verbintenissen betreffende een aantal bepalingen ten aanzien van de concrete toepassing van de regeling nakomt. Zij slaat evenwel in geen geval op eventuele afzonderlijke uitvoeringsmaatregelen (koninklijke en ministeriële besluiten, decreten enz.) en voorafgaande beslissingen die, doordat zij van de bovenbeschreven beginselen afwijken, tot gevolg hebben dat aan sommige centra of aan de ondernemingen van de groepen waartoe deze centra behoren, een economisch voordeel wordt verleend. In dit verband is het van weinig of geen belang of het voordeel wordt genoten zodra de voorafgaande beslissing wordt getroffen, dan wel nadien, tijdens de geldigheidsduur van deze beslissing. Deze beschikking heeft evenmin betrekking op de gevallen waarin de door België aange-gane verbintenissen (zie met name de punten 12 en 13) eventueel niet volledig worden nagekomen. In dergelijke situaties zou derhalve sprake kunnen zijn van onrechtmatige staatssteun die moet worden teruggevorderd.

⁽¹³⁾ Wat het gebruik van alternatieve belastingmethoden betreft, zie de punten 21, 22 en 27 van de Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen (PB C 384 van 10.12.1998).

III.1.3. *Behandeling van abnormale en goedgunstige voordelen, vrijstellingen van de roerende voorheffing en van het kapitaalrecht*

- (33) Zoals in punt 14 wordt aangestipt, maken de eventueel aan de centra verleende abnormale en goedgunstige voordelen geen deel uit van de belastinggrondslag van de centra, terwijl zij wel opgenomen zijn in de belastinggrondslag van elke in België gevestigde vennootschap die aan de belastingregeling volgens het gemeen recht onderworpen is. Overeenkomstig het nieuwe artikel 5, lid 4, van koninklijk besluit nr. 187 zijn de coördinatiecentra bovendien vrijgesteld zowel van de roerende voorheffing op de door hen uitgekeerde roerende inkomsten, als van het kapitaalrecht. Zoals hierboven reeds is aangegeven, is de Commissie in dit stadium van oordeel dat deze in de nieuwe regeling voor coördinatiecentra vervatte vrijstellingen voldoen aan alle vier de in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag neergelegde criteria die kenmerkend zijn voor een steunregeling.

III.1.3.1. *Economisch voordeel*

- (34) In de eerste plaats lijken deze vrijstellingen een voordeel te verlenen dat de lasten verlicht die ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen.

a) Vrijstelling van de abnormale en goedgunstige voordelen

- (35) In dit stadium is de Commissie van oordeel dat de niet-belasting ten name van de centra van de hun verleende abnormale en goedgunstige voordelen resulteert in een vermindering van de vennootschapsbelasting⁽¹⁴⁾, die een van de lasten is die in België gevestigde vennootschappen normaliter met eigen middelen moeten dragen. België is van oordeel dat deze voordelen niet bij de winst („cost plus”-grondslag) behoeven te worden gevoegd omdat zij moeten worden belast in de staat van vestiging van de vennootschap die de abnormale en goedgunstige voordelen verleent. De Commissie heeft bedenkingen ten aanzien van deze redenering. Indien immers aan vennootschap X (die in België gevestigd is en aan de belastingregeling volgens het gemeen recht onderworpen is) door vennootschap Y (die in België of in het buitenland gevestigd is) abnormale en goedgunstige voordelen worden verleend, dan worden deze voordelen automatisch ten name van vennootschap X belast. Ongeacht of het door Y verleende voordeel bestaat in het dragen van een van de lasten die normaliter op X rust, dan wel in het afrekenen van sommige verkopen van X tegen een hogere prijs dan die welke bij volledige concurrentie geldt, het voordeel komt noodzakelijkerwijze tot uiting in een stijging van de boekhoudkundige winst van de vennootschap X die het voordeel geniet. De belastbare winst van vennootschap X, die wordt berekend op basis van haar boekhoudkundige winst, omvat eveneens deze genoten voordelen, die dus automatisch ten name van X worden belast.
- (36) België betoogt dat deze initiële belasting ten name van X nadien door de werking van de internationale instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting ongedaan

wordt gemaakt. In dit verband zij opgemerkt dat deze rectificatie zich niet in alle gevallen lijkt voor te doen en dat zij, in voorkomend geval, pas vele jaren na de initiële belastingheffing plaatsvindt. Zo lijkt de rectificatie niet plaats te vinden wanneer er geen sprake is geweest van een effectieve, vergelijkbare en voorafgaande belasting van het voordeel ten name van de vennootschap Y die het voordeel heeft verleend, omdat er dan geen risico van dubbele belasting bestaat. De rectificatie vindt evenmin plaats wanneer België en de andere betrokken staat niet gebonden zijn door een internationaal instrument dat een dergelijke rectificatie mogelijk maakt door middel van de spontane uitwisseling van inlichtingen (bilateraal verdrag⁽¹⁵⁾, Europese richtlijn enz.). Onder dergelijke omstandigheden wordt de initiële belasting van de genoten voordelen definitief gedragen door vennootschap X, terwijl een centrum definitief van de belasting op dergelijke voordelen is vrijgesteld.

- (37) In het andere geval, namelijk wanneer de rectificatie geschiedt ten name van vennootschap X, dan vindt zij doorgaans pas na meerdere jaren plaats, d.w.z. na het verstrijken van de tijd die nodig is om de belasting in de andere staat te heffen en om het in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting vastgelegde rectificatiemechanisme zijn werk te laten doen. Intussen draagt vennootschap X de lasten die aan de belasting verbonden zijn. Onder dezelfde omstandigheden is het centrum gewoon van de belasting op deze voordelen vrijgesteld en draagt het dus nooit de overeenkomstige lasten die aan de inkomstenbelasting verbonden zijn. Deze verschillende behandeling lijkt de coördinatiecentra een voordeel op het gebied van de kasmiddelen op te leveren in vergelijking met vennootschap X, die de te haren laste komende initiële belasting moet financieren, ook al is dat slechts tijdelijk.
- (38) Voorts lijkt de door de Belgische autoriteiten aangegeven verbintenis (zie punt 14) om spontaan inlichtingen met de buitenlandse belastingautoriteiten uit te wisselen wanneer wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd ten nadele van de fiscus van andere staten, ontoereikend om het economisch voordeel uit te sluiten dat verbonden is aan het feit dat geen initiële belasting geheven wordt op de abnormale en goedgunstige voordelen die aan de centra worden verleend. Deze spontane uitwisseling van inlichtingen blijft immers beperkt tot gevallen waarin wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd en geschiedt op grond van een overeenkomst inzake de uitwisseling van inlichtingen en uitsluitend op basis van wederkerigheid. Een dergelijke uitwisseling lijkt derhalve het risico van een „dubbele niet-belasting” van de aan de centra verleende voordelen niet uit te sluiten en zeker niet het voordeel op het gebied van de kasmiddelen dat verbonden is aan het feit dat er geen initiële belasting ten name van de centra wordt geheven.
- (39) Ten slotte lijkt de opnemings van de abnormale en goedgunstige voordelen in de alternatieve belastinggrondslag (zie punt 15) evenmin uit te sluiten dat de centra een voordeel genieten. De door de centra ontvangen abnor-

⁽¹⁴⁾ Vennootschapsbelasting (Ven.B) voor binnenlandse vennootschappen of belasting op het inkomen van niet-inwoners/vennootschappen (BNI/Ven.), al naargelang het geval.

⁽¹⁵⁾ Bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting stellen geen systematische uitwisseling van inlichtingen verplicht. Zij laten de keuze uit verschillende uitwisselingsregelingen (bv. op verzoek, spontaan of automatisch), hetgeen er in de praktijk veelal op neer komt dat er sprake is van uitwisseling op verzoek.

male voordelen worden immers pas effectief belast indien het bedrag van de alternatieve belastinggrondslag het bedrag van de „cost plus”-grondslag overtreft. Aangezien deze grondslag bovendien niet bij de „cost plus”-grondslag wordt geteld maar in de plaats ervan komt, lijkt het erop dat alleen het gedeelte van de geconstateerde voordelen wordt belast dat de „cost plus”-grondslag overschrijdt of dat de „cost plus”-grondslag, de hoofdgrondslag, buiten beschouwing wordt gelaten en dus van belasting wordt vrijgesteld.

- (40) In dit stadium is de Commissie bijgevolg de mening toegedaan dat het feit dat op de door de centra genoten voordelen geen initiële belasting wordt geheven, in een voordeel voor hen kan resulteren. De Commissie is tevens van oordeel dat indien er geen spontane uitwisseling van inlichtingen zou plaatsvinden, het aan de centra toegekende voordeel dat uit de niet-belasting in België van de hun verleende abnormale en goedgunstige voordelen voortvloeit, zou blijven bestaan. Zij herinnert eraan dat dit economisch voordeel een niet onder deze beschikking vallende steunmaatregel kan vormen.

b) Vrijstelling van de roerende voorheffing

- (41) De Belgische autoriteiten zijn van oordeel dat de coördinatiecentra geen enkel economisch voordeel in de zin van artikel 87 genieten. Vanwege het grote aantal vrijstellingen van de roerende voorheffing is België immers de mening toegedaan dat de voorheffing niet mag worden beschouwd als een van de lasten die in België gevestigde ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen. Deze vrijstellingen hebben tot gevolg dat het grootste deel van de aan in België gevestigde vennootschappen uitgekeerde of door hen ontvangen roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. Dit geldt met name voor de vrijstellingen waarvan gebruik kan worden gemaakt door „beroepsbeleggers” in de zin van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna te noemen „KB/WIB92”) of door niet-inwoners.
- (42) In dit stadium is de Commissie de mening toegedaan dat de inhouding van een roerende voorheffing de regel is die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna te noemen „WIB92”) is neergelegd. De roerende voorheffing lijkt derhalve een van de lasten te zijn die zowel binnen- als buitenlandse ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen wanneer zij — in de omstandigheden waarin het Belgische gemeen recht voorziet — roerende inkomsten uit Belgische bron ontvangen. Het WIB92 bepaalt tevens dat de binnenlandse vennootschappen en de Belgische dochterondernemingen die dergelijke inkomsten uitkeren, aan de voorheffing onderworpen zijn.
- (43) Voorzover de vrijstelling van de inkomsten die door de centra worden uitgekeerd, verder gaat dan de vrijstellingen waarin het in België toepasselijke gemeen recht voorziet, lijkt zij een economisch voordeel te verlenen aan de centra en aan de groepen waartoe deze behoren. Het voordeel dat deze vrijstelling de begunstigde oplevert, vloeit, naar gelang van de gevallen, voort uit het uitstel van de betaling van de definitieve belasting of zelfs uit het niet-belasten in België van de betrokken roerende inkomsten.

- (44) Met de tot dusver door de Belgische staat geformuleerde argumenten kan om de volgende redenen niet worden ingestemd.

- (45) Ten eerste kan het feit dat er vrijstellingen bestaan waarvan door bepaalde ondernemingen gebruik kan worden gemaakt, niet worden gerechtvaardigd door het feit dat er andere vrijstellingen bestaan. In dit verband is het van weinig belang dat de vrijgestelde vennootschappen talrijker zijn dan de vennootschappen die de voorheffing betalen of moeten inhouden. Deze stelling wordt trouwens met geen enkel cijfergegeven gestaafd. Aangezien er verschillen bestaan in de toepassing van de roerende voorheffing en aangezien deze vrijstellingen de begunstigten ervan een voordeel verschaffen ten opzichte van de niet-begunstigten, vallen deze verschillen potentieel onder de toepassing van artikel 87 van het EG-Verdrag en dient te worden vastgesteld of in casu het geconstateerde voordeel steun vormt; indien dat het geval is, dient de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt te worden beoordeeld. De genoemde vrijstellingen kunnen zowel geen steun, steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, als onrechtmatig in België ten uitvoer gelegde, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun vormen. De Commissie wenst in het bijzonder de nadruk te leggen op de inhoud van haar beschikking SG(83) D/12, die op 3 januari 1983 tot België werd gericht in verband met de regeling voor in werkgelegenheidszones gevestigde vennootschappen. In deze beschikking is bepaald dat de Commissie heeft vastgesteld dat de vrijstelling van het registratierecht onder het algemene steunverbod van artikel 92 (thans artikel 87), lid 1, van het EG-Verdrag valt, vooraleer deze steun in dat specifieke geval toch verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd verklaard. Op dit beginsel is opnieuw gewezen in de eveneens tot België gerichte beschikking ⁽¹⁶⁾ SG(2000) D/108799.

- (46) Ten tweede wordt de grote meerderheid van de door België genoemde vrijstellingen slechts onder strikte voorwaarden en met inachtneming van bepaalde formaliteiten toegestaan. Deze vrijstellingen volstaan evenwel niet om alle begunstigten van inkomsten die door in België gevestigde vennootschappen worden uitgekeerd, dezelfde voordelen te verlenen als die welke begunstigten van door de centra uitgekeerde inkomsten genieten. De toekenning van dergelijke vrijstellingen lijkt overigens slechts zelden alleen samen te hangen met de hoedanigheid van de schuldenaar van de inkomsten, maar, in voorkomend geval, met de hoedanigheid van de begunstigde. Bovendien lijken de vrijstellingen die aan in België gevestigde beroepsbeleggers zijn toegekend, beperkt te blijven tot de inkomsten uit schuldvorderingen en verstrekte leningen en derhalve geen betrekking te hebben op dividenden en royalty's. Ook de vrijstellingen die gelden voor aan niet-inwoners uitgekeerde inkomsten lijken hoofdzakelijk beperkt te blijven tot spaarders niet-inwoners, zodat de vergelijking in het kader van deze analyse niet relevant is. Het is immers weinig waarschijnlijk dat de typische begunstigde van de door coördinatiecentra van multinationale groepen uitgekeerde inkomsten de spaarder niet-inwoner is.

⁽¹⁶⁾ N 226/2000 regionale steunregeling van de wet van 30 december 1970.

- (47) Ten derde worden met de beperking van de vrijstelling tot de gevallen waarin de begunstigde kan worden geïdentificeerd als niet zijnde een natuurlijk persoon, een rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of een buitenlandse rechtspersoon, kennelijk alleen natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk of daarmee gelijk te stellen entiteiten beoogd. De enige voorwaarde waaraan binnen- en buitenlandse vennootschappen moeten voldoen om van de voorheffing te worden vrijgesteld, is dat zij geïdentificeerd moeten zijn. Het blijkt evenwel dat de voorheffing volgens het gemeen recht de definitieve Belgische belasting vormt voor zowel de inkomsten die worden uitgekeerd aan spaarders — natuurlijke personen — of aan verenigingen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, als de inkomsten die worden uitgekeerd aan buitenlandse vennootschappen die in het land van bestemming van deze inkomsten de verrekening of de terugbetaling ervan niet kunnen verkrijgen. In het onderhavige geval houdt de vrijstelling die geldt voor de door de centra uitgekeerde inkomsten, een voordeel in voor de vennootschappen die in het buitenland zijn gevestigd, aangezien de voorheffing voor hen normaliter een definitieve belasting vormt.
- (48) Ter illustratie volgt hierna een niet-uitputtende lijst van de inkomsten die van de roerende voorheffing lijken te zijn vrijgesteld wanneer zij door coördinatiecentra worden uitgekeerd, maar niet wanneer zij door aan het gemeen recht onderworpen vennootschappen worden uitbetaald:
- de dividenden die buiten de bij artikel 106, lid 6, van KB/WIB92 vastgelegde voorwaarden aan een in België gevestigde vennootschap worden uitgekeerd;
 - de dividenden die buiten de bij artikel 106, lid 5, van KB/WIB92 tot toepassing van Richtlijn 90/435/EEG vastgelegde voorwaarden aan een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap worden uitgekeerd;
 - de roerende inkomsten die worden uitgekeerd aan een vennootschap die is gevestigd in een van de talrijke landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten die in een inhouding aan de bron voorziet, ook al is deze beperkt;
 - de roerende inkomsten die worden uitgekeerd aan een buitenlandse vennootschap die buiten de Europese Unie is gevestigd in een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten.
- (49) Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden lijkt deze verschillende behandeling rechtstreeks de begunstigten te bevoordelen van inkomsten die worden uitgekeerd door de centra, aangezien deze de bruto-inkomsten ontvangen, zonder inhouding van de voorheffing. Als gevolg daarvan lijken de centra voor dezelfde transacties en onder dezelfde omstandigheden hogere inkomsten te kunnen uitbetalen dan de andere in België gevestigde vennootschappen. De betrokken begunstigten kunnen echter pas van het voordeel van de vrijstelling profiteren wanneer zij de transactie verrichten of hun kapitaal in een centrum investeren. Vanwege de vrijstellingen van de roerende voorheffing bekleden de coördinatiecentra en de groepen die dergelijke centra bezitten, derhalve een bevoorrechte positie op de markten.
- (50) Wat de groep als geheel betreft, heeft de niet-heffing van de roerende voorheffing eveneens als direct voordeel dat de tot de groep behorende begunstigde vennootschappen van de vrijgestelde inkomsten in een betere financiële positie komen te verkeren, waardoor zich een algemene verbetering van de financiële positie van de groep voordoet. Deze verbetering van de financiële positie van de groep zal vermoedelijk tot uiting komen in een betere beoordeling van de kredietwaardigheid van de groep, waardoor deze gunstigere voorwaarden op de financiële markt kan bedingen en zijn financiële positie verder kan versterken.
- (51) De Belgische regering attendeert er tevens op dat de Commissie pleit voor de afschaffing van bronheffingen en dat de regeling voor coördinatiecentra in deze richting gaat. Met dit argument wordt verwezen naar de algemene context van de harmonisatie, terwijl de regeling voor coördinatiecentra tegen de achtergrond van het momenteel in België toepasselijke gemeen belastingrecht moet worden onderzocht. Het Belgische gemeen recht berust evenwel nog steeds op het beginsel van de inhouding van een voorheffing op roerende inkomsten. De regeling voor coördinatiecentra moet dus weliswaar als een stap in de goede richting worden gezien, maar het gaat om een selectieve stap doordat aan de centra een voordeel wordt toegekend ten opzichte van de andere vennootschappen die op het Belgische grondgebied gevestigd zijn.
- c) Vrijstelling van het kapitaalrecht
- (52) Wat het kapitaalrecht betreft, kan uit de artikelen 115 en volgende van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten worden afgeleid dat de belasting van inbrengen in en verhogingen van het kapitaal in België de regel is. Dit lijkt bovendien te worden bevestigd door Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal⁽¹⁷⁾, die bepaalt dat de lidstaten die voor het handhaven van het kapitaalrecht opteren (hetgeen voor België het geval is), op elke inbreng in kapitaalvennootschappen — met uitzondering van de krachtens de richtlijn vrijgestelde verrichtingen — een eenvormig recht heffen van niet meer dan 1 %. Het kapitaalrecht lijkt derhalve een van de lasten te zijn die normaliter met eigen middelen moeten worden gedragen door elke kapitaalvennootschap die in België tot een inbreng in of een verhoging van haar kapitaal overgaat. De vrijstelling van deze belasting lijkt de centra en de multinationale ondernemingen waarvan zij deel uitmaken derhalve een voordeel te verlenen ten opzichte van andere kapitaalvennootschappen die in België tot soortgelijke operaties overgaan.
- (53) België betwist dat het kapitaalrecht een van de lasten is die de ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen en voert ter staving daarvan aan dat het Belgisch recht in andere vrijstellingen van het kapitaalrecht voorziet, zoals met name die welke zijn verleend aan vennootschappen gevestigd in werkgelegenheidszones

⁽¹⁷⁾ Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, laatstelijk gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 249 van 3.10.1969, blz. 25).

en die welke samenhangen met de toekenning van bepaalde subsidies ter bevordering van de investeringen en de werkgelegenheid in België. Volgens de Belgische autoriteiten geniet het merendeel van de kapitaalinvloeding in België bijgevolg één of andere vrijstelling, zodat er dus geen sprake is van een specifiek aan de centra toegekend voordeel. In dit verband is de Commissie van oordeel dat het enkele feit dat er andere vrijstellingen bestaan, en dat deze zelfs talrijk zijn, niet volstaat om een vrijstelling afdoende te rechtvaardigen. Ieder voordeel moet volgens de voorwaarden en omstandigheden die inherent zijn aan de toekenning ervan aan de geldende regels inzake staatssteun worden getoetst. De genoemde vrijstellingen kunnen zowel geen steun, steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, als onrechtmatig in België ten uitvoer gelegde, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun vormen. De Commissie wenst in het bijzonder de nadruk te leggen op de inhoud van haar beschikking SG(83) D/12, die op 3 januari 1983 tot België werd gericht in verband met de regeling voor in werkgelegenheidszones gevestigde vennootschappen. In deze beschikking is bepaald dat de Commissie heeft vastgesteld dat de vrijstelling van het registratierecht onder het algemene steunverbod van artikel 92 (thans artikel 87), lid 1, van het EG-Verdrag valt, vooraleer deze steun in dat specifieke geval toch verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd verklaard. Op dit beginsel is opnieuw gewezen in de eveneens tot België gerichte beschikking ⁽¹⁸⁾ SG(2000) D/108799.

- (54) Om de vrijstelling van het kapitaalrecht te rechtvaardigen, verwijst België tevens naar een aantal door de Raad en de Commissie geformuleerde standpunten ten gunste van de afschaffing van het kapitaalrecht. Deze verwijzing lijkt op zijn minst paradoxaal aangezien de betaling van dit recht in België de regel is. De vrijstelling van de centra lijkt op zijn best te kunnen worden beschouwd als een stap in de aangewezen richting, maar deze stap lijkt op discriminerende wijze te worden gezet, waarbij de centra in vergelijking met de andere op het Belgische grondgebied gevestigde vennootschappen worden begunstigd.

III.1.3.2. Gebruik van staatsmiddelen

- (55) Ten tweede moet dit voordeel met staatsmiddelen worden bekostigd. In het onderhavige geval lijken de bovenbeschreven vrijstellingen — direct of als gevolg van het uitstel van de betaling van de belasting — tot een vermindering van de staatsmiddelen te leiden.
- (56) In dit verband lijkt geen rekening te kunnen worden gehouden met de verwachte toename van de algemene belastinginkomsten naar aanleiding van de invoering van deze vrijstellingen omdat het steunkarakter van een maatregel individueel op het niveau van de begunstigde vennootschap — en op een bepaald moment — moet worden beoordeeld om vast te stellen of bepaalde vennootschappen meer ontvangen van de staat of minder bijdragen tot de financiering van openbare goederen en diensten.

⁽¹⁸⁾ N 226/2000 regionale steunregeling van de wet van 30 december 1970.

III.1.3.3. Vervalsing van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten

- (57) In dit stadium is de Commissie tevens van oordeel dat de in deze beschikking beschreven voordelen een vervalsing van de mededinging tussen de in België gevestigde vennootschappen veroorzaken of dreigen te veroorzaken en dat deze vervalsing het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden. Volgens de jurisprudentie van het Hof ⁽¹⁹⁾ en zoals opgemerkt in punt 11 van de mededeling, kan op grond van het enkele feit dat de steun de positie van deze onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, worden aangenomen dat dit handelsverkeer ongunstig is beïnvloed.
- (58) In dit verband blijkt dat de centra door de voordelen die zij genieten, hun concurrentiepositie inderdaad lijken te versterken in de sector van de aan de groepsleden verleende diensten — waar zij onder meer direct concurreren met financiële instellingen, trustmaatschappijen en in fiscale aangelegenheden, aanwerving, informatica, enz. gespecialiseerde adviesbureaus — en op hun beurt ook de concurrentiepositie lijken te versterken van andere tot de groep behorende vennootschappen in de talrijke economische sectoren waarin deze actief zijn. Al deze sectoren zijn het onderwerp van intensieve internationale en intracommunautaire handel en de grote multinationale ondernemingen concurreren daar rechtstreeks met andere multinationale of lokale ondernemingen van verschillende grootte.
- (59) Voorts kan het bestaan van vergelijkbare of concurrerende bepalingen in andere lidstaten geen rechtvaardiging vormen voor het toekennen van staatssteun. Zoals elke maatregel moet ook de regeling voor coördinatiecentra worden geanalyseerd in de context van het belastingstelsel van de betrokken lidstaat.
- (60) Ten slotte profiteert de groep op directe en indirecte wijze van de financiële voordelen die voortvloeien uit het belastingstelsel dat van toepassing is op de coördinatiecentra. Deze voordelen versterken de financiële positie van de groep, hetgeen de door de banken aan deze groep toegekende rating kan beïnvloeden, waardoor zijn financiële positie nog verder wordt versterkt doordat hij toegang krijgt tot gunstigere voorwaarden.

III.1.3.4. Selectiviteit/specificiteit van de maatregel

- (61) Ten slotte moet de maatregel selectief of specifiek zijn, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigt.
- (62) De bovenbeschreven voordelen lijken specifiek te zijn aangezien zij kennelijk bepaalde ondernemingen begunstigen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag. De regeling is rechtstreeks van toepassing op de coördinatiecentra en, direct of indirect, op de andere vennootschappen van de multinationale groep waartoe deze centra noodzakelijkerwijs moeten behoren. De selectiviteit vloeit derhalve niet voort uit regionale of sectorale criteria, maar

⁽¹⁹⁾ Arrest van het Hof van 17 september 1980 in zaak 730/79, Philip Morris/Commissie, Jurispr. 1980, blz. 2671.

uit de verplichte criteria waaraan de centra en de groepen waartoe zij behoren moeten voldoen om te worden erkend en zo van de regeling te kunnen profiteren (zie punt 8). Het gaat onder meer om criteria betreffende de omvang en het multinationale karakter van de groep, en de aard en het karakter van de binnen de groep ontplooiende activiteiten. De definitie van het begrip „multinationaal karakter”, die later bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld, kan deze selectiviteit nog versterken.

- (63) Doordat de belastingregels in kwestie alleen gelden voor coördinatiecentra van multinationale groepen die bovendien aan bepaalde voorwaarden op het gebied van omzet en geïnvesteerd eigen vermogen moeten voldoen, zijn deze regels niet van toepassing op:

- ondernemingen die andere taken vervullen dan die welke bij koninklijk besluit nr. 187 zijn toegestaan;
- eventuele groepen van ondernemingen die niet aan de criteria ter zake van het multinationale karakter voldoen;
- groepen van ondernemingen die niet aan de criteria ter zake van geïnvesteerd eigen vermogen en behaalde omzet voldoen;
- ondernemingen uit de financiële sector.

Rechtvaardiging door de aard of de opzet van het stelsel

- (64) Zoals in punt 23 van de bovenbedoelde mededeling wordt gesteld, betekent „het feit dat sommige bepalingen differentieel van aard zijn, (...) niet noodzakelijk dat zij als steunmaatregelen moeten worden beschouwd.” Sommige maatregelen die als steunmaatregelen overkomen, kunnen immers gerechtvaardigd blijken vanwege de aard en de opzet van het stelsel. In de mededeling staat verder dat „het echter de taak van de lidstaat is een dergelijke rechtvaardiging aan te voeren”. Volgens de Commissie kan uit geen enkel van de tot dusver door de Belgische autoriteiten aangevoerde argumenten worden geconcludeerd dat de beoogde vrijstellingen door de aard en de opzet van het Belgisch belastingstelsel worden gerechtvaardigd en dat het algemene veeleer dan selectieve maatregelen betreft.
- (65) De Belgische autoriteiten illustreren met een cijfervoorbeeld dat vennootschappen in het algemeen — en coördinatiecentra in het bijzonder — van de roerende voorheffing moeten worden vrijgesteld omdat zij elk jaar zeer veel financiële transacties verrichten. Zonder deze vrijstelling zou het totaalbedrag van de ingehouden voorheffingen het bedrag van de over het hele jaar verschuldigde belasting ver overtreffen, waardoor de Belgische staat zich verplicht zou zien aanzienlijke bedragen terug te betalen aan alle vennootschappen van het land. Dit zou in nog sterkere mate gelden voor de coördinatiecentra vanwege hun activiteiten in het kader van de centralisatie van het kasbeheer (cash pooling). Dit voorbeeld lijkt in het onderhavige geval niet relevant. Hierbij wordt er immers ten onrechte van uitgegaan dat de vennootschap die de inkomsten ontvangt, de belasting in België betaalt, maar in dat geval is het gemeen recht voldoende om de transactie vrij te stellen van de voorheffing. Deze procedure heeft bovendien geen betrekking op de — talrijke — vrijstellingen waarin het gemeen recht voorziet en waarvan de

centra gebruik zullen kunnen blijven maken, maar uitsluitend op de aanvullende vrijstellingen die alleen voor de centra gelden. De kans dat de coördinatiecentra een voorheffing op alle uitgekeerde inkomsten moeten inhouden, lijkt dus beperkt te blijven tot de gevallen waarin alle inkomsten zouden worden uitgekeerd aan belastingplichtigen die niet kunnen profiteren van de algemene vrijstellingen waarin het Belgische en communautaire recht en de door België gesloten internationale verdragen voorzien. En in die veronderstelling zou het centrum eenvoudigweg dezelfde risico's lopen als andere vennootschappen die dezelfde activiteiten ontplooiën in een groep die niet voldoet aan de in koninklijk besluit nr. 187 neergelegde voorwaarden.

III.2. Nieuwe steun

- (66) In dit stadium is de Commissie om drie belangrijke redenen de mening toegedaan dat de vrijstellingen van de roerende voorheffing en van het kapitaalrecht als nieuwe steun moeten worden aangemerkt. Ten eerste maken deze vrijstellingen een integrerend deel uit van de aangemelde ontwerp tekst, doordat deze tekst artikel 5 van koninklijk besluit nr. 187 wijzigt. Ten tweede is ook de procedure voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van de centra gewijzigd en moeten de criteria ter zake van het multinationale karakter van de in aanmerking komende groepen later nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De inwerkingtreding van de gewijzigde regeling zal eveneens later bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Ten derde heeft de Commissie de toepassing van de oude „cost plus”-methode en de in het kader van de vroegere regeling voor coördinatiecentra geldende vrijstellingen bij haar negatieve eindbeschikking van 17 februari 2003 onrechtmatig verklaard. De uit hoofde van de nieuwe regeling verleende vrijstellingen mogen derhalve geen voortzetting zijn van de bestaande steun waarin de vroegere regeling voorzorg.
- (67) Geen enkele van de in artikel 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 88 van het EG-Verdrag ⁽²⁰⁾ omschreven situaties lijkt hier van toepassing te zijn.

III.3. Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt

- (68) Aangezien de voor de coördinatiecentra geldende belastingvrijstellingen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag lijken te vormen, dient een eerste beoordeling van de eventuele verenigbaarheid ervan te worden verricht in het licht van de uitzonderingen van artikel 87, leden 2 en 3, van het EG-Verdrag.
- (69) In dit stadium lijkt de regeling voor coördinatiecentra met geen enkele van de uitzonderingen van artikel 87, lid 2, overeen te komen, want de regeling is niet bedoeld voor individuele verbruikers en lijkt evenmin gericht te zijn op het herstellen van de schade veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen of op het compenseren van een ernstige verstoring van de Belgische economie. Ook de uitzonderingen van artikel 87, lid 3, onder b), d) en e),

⁽²⁰⁾ PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

lijken in het onderhavige geval niet van toepassing te zijn, want met de onderzochte vrijstellingen wordt niet beoogd de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang of de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen. Deze vrijstellingen behoren evenmin tot een categorie steunmaatregelen die door de Raad op voorstel van de Commissie verenigbaar zijn verklaard.

- (70) Wat de toepassing van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 3, onder a) en c), betreft, zijn de Belgische autoriteiten van oordeel dat de regeling voor coördinatiecentra het verrichten van investeringen en de schepping van werkgelegenheid in de hand werkt. Volgens de Belgische autoriteiten is de oprichting van een coördinatiecentrum een menselijke, financiële, materiële en vastgoed-investering. Bovendien is een van de voorwaarden voor de erkenning van een coördinatiecentrum dat het ten minste tien voltijdse werknemers in dienst moeten hebben na verloop van twee jaar sinds het met zijn activiteiten is begonnen.
- (71) De Commissie constateert dat er in dit stadium geen enkel element werd verstrekt aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de investeringen van de centra kunnen worden aangemerkt als voor steun in aanmerking komende initiële investeringen zoals omschreven in de punten 4.4 en 4.5 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen ⁽²¹⁾. Voor grote ondernemingen, de categorie waartoe de meeste centra behoren, is investeringssteun overigens uitsluitend toegestaan in de regio's die vallen onder de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, onder a) en c). Met betrekking tot de schepping van arbeidsplaatsen, ten slotte, staat in de richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun ⁽²²⁾ dat het steunniveau niet hoger mag zijn dan noodzakelijk om de schepping van arbeidsplaatsen te stimuleren. In het onderhavige geval constateert de Commissie dat het bedrag van de uit de regeling voortvloeiende belastingvoordelen kennelijk afhankelijk is van de omvang van de door het centrum gegenereerde activiteit, veeleer dan van het aantal geschapen arbeidsplaatsen.
- (72) De aan de centra toegekende belastingvoordelen lijken dus niet gebonden te zijn aan investeringen, werkgelegenheidsschepping of specifieke projecten. Zij vormen derhalve permanente lastenverlichtingen die exploitatiesteun vormen. Exploitatiesteun is in beginsel echter verboden. In punt 4.15 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen wordt bepaald dat dergelijke steun evenwel bij uitzondering onder bepaalde voorwaarden mag worden toegestaan in die regio's die onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a), vallen. Aangezien België niet onder deze bepaling valt, kunnen de steunmaatregelen in kwestie de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, vermoedelijk zodanig veranderen dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. In deze omstandigheden zouden zij dan ook niet vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder c). In het onderhavige geval lijkt de vergelijking met de werkgelegenheidszones, die de Commissie in 1982 heeft goedgekeurd, niet relevant om de verenigbaarheid van de

maatregel met de gemeenschappelijke markt te verdedigen aangezien deze beschikking alleen de Waalse en Vlaamse werkgelegenheidszones betrof die op dat moment met een hoge werkloosheid te kampen hadden. De oprichting van een werkgelegenheidszone in het Brussels Gewest werd daarbij categorisch uitgesloten door de Commissie. De meeste coördinatiecentra blijken evenwel in dit gewest te zijn gevestigd.

- (73) Op het eerste gezicht lijken de vrijstellingen in kwestie derhalve onder geen enkele van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87 van het EG-Verdrag te vallen. De Commissie betwijfelt bijgevolg of de belastingregeling voor coördinatiecentra verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.
- (74) In verband met de vrijstelling van het kapitaalrecht die de coördinatiecentra genieten, vraagt de Commissie zich bovendien ook af of deze vrijstelling wel verenigbaar is met de bepalingen van Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal ⁽²³⁾. Deze richtlijn voert immers een zeer strikt kader in door te bepalen dat de lidstaten die voor het handhaven van het kapitaalrecht opteren (hetgeen voor België het geval is), op elke inbreng in kapitaalvennootschappen — met uitzondering van de krachtens de richtlijn vrijgestelde verrichtingen — een recht heffen van niet meer dan 1 %. De uitsluitend aan de centra verleende vrijstelling van het kapitaalrecht lijkt aan geen enkele van de voorwaarden voor een specifieke vrijstelling te voldoen en zou dus in strijd zijn met genoemde richtlijn. Indien de aangemelde maatregel inderdaad tegen Richtlijn 69/335/EEG blijkt in te druisen, kan de Commissie deze maatregel in geen geval verenigbaar verklaren met de gemeenschappelijke markt.

IV. BESCHIKKING

- (75) De Commissie heeft besloten:

- ten eerste, dat erkenningen van centra en ten behoeve van centra getroffen voorafgaande beslissingen, alsook de forfaitaire vaststelling van hun belastbaar inkomen dat aan de belasting van (binnen- en buitenlandse) vennootschappen onderworpen is, in het in deze beschikking beschreven kader in principe geen steunmaatregelen vormen;
- ten tweede, dat het op grond van de nog steeds heersende twijfel omtrent de verenigbaarheid van de vrijstellingen van de door de centra genoten abnormale en goedgunstige voordelen, de roerende voorheffing en het kapitaalrecht gerechtvaardigd is dat ten aanzien van deze maatregelen de formele onderzoekprocedure wordt ingeleid.

- (76) De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst tevens naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.

⁽²¹⁾ PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9.

⁽²²⁾ PB C 334 van 12.12.1995, blz. 4.

⁽²³⁾ Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, laatstelijk gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 249 van 3.10.1969, blz. 25).

(77) Voorts deelt de Commissie België mee dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de toezichthoudende autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking.»

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé ce qui suit. D'une part, elle a décidé de ne pas soulever d'objection au sujet du régime forfaitaire de détermination des revenus imposables des centres de coordination (ci-après «centres») à l'exception du traitement réservé aux avantages anormaux et bénévoles; d'autre part, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du traitement des avantages anormaux et bénévoles consentis aux centres lorsque ceux-ci n'ont pas été préalablement imposés dans le chef des sociétés qui les consentent, ainsi qu'au sujet des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport prévues par le nouvel article 5, paragraphe 4 de l'arrêté royal n° 187.

I. PROCÉDURE

- (1) Le 1^{er} décembre 1997, le Conseil a adopté un Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ⁽¹⁾ et demandé à la Commission d'examiner ou de réexaminer les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres. Le 11 novembre 1998, la Commission a adopté une Communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises ⁽²⁾ (ci-après «la communication»).
- (2) L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 prévoit un régime fiscal dérogatoire du droit commun pour les centres de coordination agréés. Dans le cadre des travaux du groupe Code de Conduite du Conseil, il a été jugé que ce régime constituait une mesure de concurrence fiscale dommageable. La Commission avait également entamé une procédure formelle d'examen à son égard depuis le 27 février 2002. Cette procédure a été clôturée le 17 février 2003 par une décision finale négative.
- (3) Conformément à l'article 88 du traité, la Belgique a, par lettre du 16 mai 2002, notifié la partie d'un avant-projet de loi relative à la modification de l'arrêté royal n° 187 visant à le rendre conforme aux critères fixés par le groupe Code de Conduite du Conseil. Il s'agit donc d'un nouveau régime des centres de coordination destiné à remplacer le régime en vigueur depuis 1983, dont le bénéfice ne peut plus être accordé depuis le 17 février

2003. La loi ⁽³⁾ a été adoptée le 24 décembre 2002. Aux termes de l'article 32 de la loi, la date d'entrée en vigueur du nouveau texte de l'arrêté royal n° 187 sera fixée ultérieurement par arrêté royal.

- (4) Par lettres des 18 juillet et 8 novembre 2002, la Commission a demandé des renseignements complémentaires qui lui ont été fournis par lettres de la représentation permanente datées respectivement des 11 septembre et 16 décembre 2002. Au cours de la réunion tenue le 13 décembre 2002 entre les représentants du Service public fédéral finances et ceux de la Commission, des précisions complémentaires ont été demandées. La représentation permanente de la Belgique a fourni ces précisions à la Commission par lettre datée du 4 février 2003 et reçue le 10 février.
- (5) Le 17 février 2003, la Commission a clôturé la procédure formelle d'examen ouverte ⁽⁴⁾ le 27 février 2002 à l'égard du régime des centres de coordination. La décision finale de la Commission déclare que les diverses mesures d'exonération de précompte immobilier, précompte mobilier et droit d'apport réservées aux centres de coordination agréés sont des aides existantes, incompatibles avec les articles 87 et 88 CE. Elle déclare également aide existante incompatible, l'application de la méthode forfaitaire de type cost plus utilisée pour déterminer la base imposable de ces centres, en raison de ses modalités propres. La Belgique a été informée de cette décision par lettre du 17 février 2003 ⁽⁵⁾. L'octroi ou le renouvellement du bénéfice de ces aides est illégal à compter du 17 février 2003, date de la décision finale.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

II.1. Base juridique

- (6) Le régime des centres de coordination trouve son origine dans l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982. Il a été complété par la loi du 11 avril 1983, l'arrêté Royal du 20 décembre 1984 et la loi du 28 décembre 1992 et modifié à plusieurs reprises ⁽⁶⁾.
- (7) L'article 29 de la loi du 24 décembre 2002 (ci-après «la loi») apporte de nouvelles modifications au régime. Après l'entrée en vigueur de ces modifications, le régime présentera les caractéristiques suivantes.

II.2. Conditions

- (8) Comme auparavant, le bénéfice du régime est accordé aux seuls centres agréés préalablement et individuellement par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire

⁽¹⁾ Document publié au *Journal officiel de l'Union Européenne* (JO C 2 du 6.1.1998).

⁽²⁾ JO C 384 du 10.12.1998.

⁽³⁾ Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale — Moniteur Belge du 31 décembre 2002 (Ed 2), p. 58817 et suiv.

⁽⁴⁾ Lettre SG(2002) D/228734 publiée dans le JO C 147 du 20 juin 2002.

⁽⁵⁾ La décision finale datée du 17 février 2003 porte la référence C(2003) 564 final, la lettre du 17 février 2003 informant la Belgique de cette décision porte la référence SG(2003)*D/228522 (non encore publiée).

⁽⁶⁾ Loi du 27 décembre 1984, loi du 4 août 1986, arrêté Royal du 3 novembre 1986, loi du 28 décembre 1990, loi du 23 octobre 1991, loi du 4 avril 1995.

partie d'un groupe ayant un caractère multinational, disposant d'un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède 24 millions EUR et réalisant un chiffre d'affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède 240 millions EUR. Les critères définissant le caractère multinational du groupe seront définis ultérieurement par arrêté royal. Le centre de coordination doit avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit de tout ou partie des sociétés du groupe, d'une ou plusieurs activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire autorisées par la loi ⁽⁷⁾. Les entreprises du secteur financier (crédit, banque, assurance) sont exclues du bénéfice de ce régime. Le centre ne peut pas posséder d'actions ou autres parts représentatives de droits sociaux dans une quelconque société, sauf à titre de placement de trésorerie. Enfin, les centres devront employer en Belgique au moins l'équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

- (9) L'agrément est octroyé au centre à partir de la période imposable au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable clôturée au cours de la dixième année civile qui suit celle de l'introduction de la demande. Pour autant que les conditions d'agrément soient toujours remplies, celui-ci peut être renouvelé sur demande par le Service public fédéral Finances, avec l'accord des Ministre des Finances, de l'Économie, de l'Emploi et du Travail et du Ministre chargé des Classes moyennes. La loi prévoit également que les effets de l'agrément prennent fin avant l'expiration du terme de dix ans en cours en cas de décision définitive des autorités des Communautés européennes imposant l'abrogation du présent régime des centres de coordination. De même, l'agrément est abrogé, de plein droit, dès l'exercice au cours duquel le centre ne remplit plus toutes les conditions de l'agrément. Il en est ainsi notamment si le centre exerce des activités qui ne sont pas reprises à l'annexe de l'arrêté royal par lequel il a été agréé — ou par la décision par laquelle cet agrément a été renouvelé.

II.3. Dispositions particulières

- (10) Par dérogation au régime fiscal de droit commun ⁽⁸⁾, l'arrêté royal n° 187 nouveau prévoit que le revenu imposable des centres agréés est déterminé forfaitairement et correspond à un pourcentage du montant des dépenses et frais de fonctionnement — selon la méthode dite «cost plus». L'application pratique de cette méthode se fait de manière individuelle pour chaque centre, selon des modalités fixées par une décision anticipée émanant du service Public Fédéral Finances (voir points 19 à 22).
- (11) La base de coûts comprend l'ensemble des charges du centre à l'exception des impôts. Les débours occasionnels engagés pour le compte de sociétés du groupe et qui

auraient pu être facturés directement par le prestataire à ces sociétés pourront également être exclus de la base du cost plus. Il s'agit de l'application stricte d'un principe de droit comptable qui s'applique à toutes les sociétés.

- (12) Une marge bénéficiaire est fixée, pour chaque activité, compte tenu des conditions d'exercice propres à chaque centre. La Belgique s'est engagée à adapter la méthode de taxation à certaines activités générant peu ou pas de frais, notamment dans le cas particulier de prêts accordés par les centres sur fonds propres. Les taux de marge sont établis en accord avec les principes établis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) de manière à obtenir, pour chaque centre, un revenu imposable comparable à celui qui aurait été obtenu par la méthode classique (produits moins charges) dans des conditions d'indépendance des prestataires et clients. Le taux de marge est fixé par une décision anticipée — voir point 19 — établie par le Service Public Fédéral Finances ⁽⁹⁾, qui tient compte des conditions économiques et juridiques dans lesquelles le centre exerce ses activités au sein du groupe.
- (13) Les dépenses ou charges non déductibles au titre de frais professionnels (dites «dépenses non admises») ne sont pas systématiquement ajoutées aux revenus calculés selon la méthode cost plus. Les autorités belges ont toutefois confirmé que le taux de marge relatif à chacune des activités du centre sera fixé de manière à refléter une situation normale eu égard aux circonstances de fait et de droit dans lesquelles se trouve le centre. Ceci signifie que dans la mesure où l'existence de dépenses non admises dans un secteur économique déterminé aurait pour effet de donner un avantage fiscal aux centres par rapport aux entreprises de ce même secteur soumises à la méthode «produits moins charges», le taux du cost plus serait adapté cas par cas.
- (14) De même, en principe, les avantages anormaux ou bénévoles ⁽¹⁰⁾ consentis au centre par les membres du groupe ne sont pas ajoutés à la base imposable obtenue selon la méthode cost plus. Selon les autorités belges, il n'y a pas lieu de rajouter ces avantages à la base du centre car les services de contrôle compétents ont reçu l'instruction d'échanger spontanément des renseignements avec les administrations fiscales étrangères lorsqu'il est supposé qu'une fraude importante a été commise au détriment du fisc d'autres États. En outre, les dispositions des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique en matière d'échange de renseignements, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ⁽¹¹⁾ et de la convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées ⁽¹²⁾ permettent également de traiter les problèmes relatifs aux prix de transfert.

⁽⁹⁾ Ex-Ministère des Finances.

⁽¹⁰⁾ La notion d'avantage anormal ou bénévole, utilisée à l'article 26 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est précisée au n° 26/16 du Commentaire du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (Com.IR 1992).

⁽¹¹⁾ JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

⁽¹²⁾ JO L 225 du 20.8.1990.

⁽⁷⁾ Opérations financières et couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêt; assurance et gestion des risques; recherche scientifique; relations non commerciales avec les autorités nationales et internationales; opérations dans le domaine de la comptabilité et de l'administration; opérations dans le domaine de l'informatique; publicité et marketing; fourniture et rassemblement d'informations et assistance à la gestion; opérations d'achat; toute autre activité ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les sociétés du groupe.

⁽⁸⁾ Cette expression vise l'ensemble des règles généralement applicables pour le calcul de l'impôt des sociétés, résidentes ou non, établies en Belgique.

- (15) Le bénéfice imposable du centre ne peut cependant être inférieur au montant de la base alternative correspondant au total 1) des dépenses non admises — à l'exclusion des impôts — et 2) des avantages anormaux ou bénévoles consentis au centre par les membres du groupe.
- (16) Le bénéfice des centres est imposé au taux plein de l'impôt des sociétés.
- (17) La loi du 28 décembre 1992 a instauré, à partir du 1^{er} janvier 1993, une taxe annuelle sur les centres de coordination fixée à 10 000 EUR par membre du personnel occupé à temps plein par les centres, mais qui ne peut excéder 100 000 EUR par centre. Un crédit d'impôt est accordé dont le montant est égal à celui de la taxe annuelle payée. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.
- (18) Outre le calcul forfaitaire décrit ci-dessus, les exonérations suivantes sont applicables aux centres.
- 1) lorsque le bénéficiaire peut être identifié comme n'étant pas une personne physique, une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, ni une personne morale non-résidente, le centre n'est pas redevable du précompte mobilier en raison des dividendes distribués, des revenus de créances ou prêts ou des produits de la concession de biens mobiliers immatériels, dont il est débiteur;
 - 2) le droit d'enregistrement proportionnel n'est pas dû en raison des apports et des augmentations du capital statutaire, sans apport nouveau, de ce centre.

Selon les autorités belges, il s'agit des exonérations antérieurement prévues à l'article 29, al. 1^{er}, 2^o et 3^o de la loi du 11 avril 1983. Étant donné que seules ces deux exonérations ont été conservées, elles ont été reprises dans l'arrêté royal n^o 187 pour des raisons de cohérence et de lisibilité.

II.4. Décision anticipée

- (19) Comme précisé dans la description du régime, la détermination pour chaque centre des paramètres de la méthode cost plus se fait par le biais d'une décision anticipée — voir point 12. Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine, conformément aux dispositions en vigueur, comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.
- (20) La décision anticipée est rendue sur demande. La demande doit contenir l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés, la description des activités du demandeur, la description complète de la situation ou de l'opération particulière, la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles devra porter la décision. Elle contient également, le cas échéant, une copie intégrale des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des États membres des Communautés européennes ou d'États tiers

avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, et des décisions qui s'y rapportent.

- (21) Les décisions anticipées sont rendues pour un terme de cinq ans. Selon l'article 23 de la loi du 24 décembre 2002, elles lient le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf:
- 1) lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies;
 - 2) lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur;
 - 3) en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée;
 - 4) lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne.

En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.

- (22) Les décisions sont publiées de manière anonyme, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel.

III. APPRÉCIATION DE LA MESURE

III.1. Caractère d'aide des mesures: applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

- (23) Comme exposé en préambule à cette décision, l'appréciation de la Commission au regard du régime notifié est différente selon qu'il s'agit d'une part, du principe de l'agrément préalable, de l'octroi de décisions anticipées ou, d'autre part, de la (non) prise en compte des avantages anormaux et bénévoles consentis aux centres en sus de l'application du cost plus, des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport.
- (24) Une mesure est une aide lorsqu'elle satisfait cumulativement aux quatre critères caractéristiques d'un régime d'aide tels que précisés par l'article 87, paragraphe 1 du traité à savoir: 1) la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises; 2) cet avantage doit être octroyé au moyen de ressources d'État, 3) affecter la concurrence et les échanges entre les États membres et 4) être octroyé de manière sélective ou spécifique, c'est-à-dire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

III.1.1. *Agréments et décisions anticipées*

(25) La Commission estime que ni l'octroi d'agréments, ni l'octroi d'une décision anticipée, ne constituent en principe, la source d'avantages économiques au sens de l'article 87 du traité. L'agrément individuel d'un centre est octroyé sur demande. Il ne fait que constater, après vérification par l'administration fiscale, que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies pour que ce centre puisse bénéficier du régime dérogatoire que la loi réserve aux seuls centres agréés. L'agrément constate les faits et reconnaît le droit au régime particulier éventuellement fixé par la loi mais ne comporte aucune référence au contenu de ce régime. L'agrément n'est donc pas susceptible, en soi, de donner droit à un régime plus favorable que celui qui s'applique aux autres sociétés établies en Belgique. Bien qu'il soit établi pour dix ans, l'agrément ne comporte pas non plus de droit à un traitement inchangé au cours de cette période. Par conséquent, aucun avantage économique n'est octroyé par l'agrément. De la même manière, une décision anticipée donnée par l'administration fiscale sur la façon dont une règle de droit fiscal s'applique à la situation particulière d'une entreprise, augmente la sécurité juridique de l'entreprise concernée. Mais elle ne constitue pas, en soi, un avantage économique. La loi précise d'ailleurs qu'une décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. À ce propos, la Commission note les dispositions de l'article 23 de la loi qui constatent la nullité de toute décision anticipée offrant, dès le départ ou en cours de validité par altération d'éléments essentiels, une modération d'impôts — incompatible avec le droit interne belge — ou un avantage économique constitutif d'aide d'État — incompatible avec le droit communautaire.

(26) L'existence éventuelle d'un avantage résiderait donc, le cas échéant, dans la mesure fiscale dont l'administration fait l'interprétation, voire dans l'interprétation elle-même. En l'espèce, l'avantage éventuel résidera soit dans les dispositions réglementaires (lois, arrêtés, circulaires, etc.) du régime des centres de coordination, soit dans ses modalités d'application, c'est-à-dire dans l'interprétation qui en sera faite dans le cadre de décisions anticipées particulières.

III.1.2. *Détermination forfaitaire des revenus imposables (Cost plus)*

(27) En ce qui concerne le nouveau régime de cost plus, le recours à une méthode alternative⁽¹³⁾ d'imposition, en l'occurrence une méthode d'évaluation du type «cost plus», peut être justifiée, notamment dans le cadre de relations commerciales intra-groupe, afin de s'assurer que ces dernières sont effectuées selon le principe de pleine concurrence. Dans le cas présent, la Commission estime que le respect des principes inscrits dans la loi du 24 décembre 2002 — ou sur lesquels la Belgique s'est engagée — garantissent que le régime dérogatoire a pour but de déterminer, pour chaque centre, pour chaque exercice fiscal, une base imposable comparable à celle qui

aurait été obtenue, en situation de concurrence parfaite, par application des règles fiscales de droit commun.

(28) En particulier, la Commission note que ce nouveau régime cost plus se distingue notablement de l'ancien régime — déclaré incompatible par la Commission le 17 février 2003 — pour les raisons essentielles suivantes. En premier lieu, dans le nouveau régime, la base de coûts du cost plus comprend l'ensemble des charges du centre. En second lieu, les marges et autres conditions — désormais fixées par décision anticipée — sont établies et adaptées en fonction des caractéristiques propres à chaque activité et au centre concernés (voir points 10 à 13) de manière à garantir des prix de transferts «at arm's length» selon les règles préconisées par l'OCDE. Des corrections sont prévues pour tenir compte notamment de l'existence de dépenses non admises ou de la faiblesse des coûts liés à l'exercice de certaines activités, et pour obtenir dans tous les cas une base imposable comparable à celle qui aurait été obtenue, en situation de concurrence parfaite, par application des règles fiscales de droit commun.

(29) Enfin, la Commission note (voir point 21) à l'article 23, alinéa 2, 1^o de la loi, que pour atteindre l'objectif d'une imposition comparable à celle qui aurait été obtenue selon la méthode traditionnelle, les décisions anticipées peuvent imposer, si nécessaire, le respect de certaines conditions à peine de nullité. La Commission comprend également que les décisions anticipées ne sont pas valables ou cessent de l'être notamment lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ou lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne. La Commission interprète ces dispositions en ce sens qu'elles garantissent donc la nullité des décisions anticipées offrant, dès le départ ou en cours de validité, une modération d'impôt — incompatible avec le droit interne belge — ou un avantage économique constitutif d'aide d'État — incompatible avec le droit communautaire. La Commission comprend ainsi que l'article 23 implique notamment la révision d'un taux de marge fixé par décision anticipée lorsque ce taux évolue par la suite et ne correspond plus aux conditions de pleine concurrence en vigueur dans le secteur d'activité de référence. La Commission comprend enfin que l'article 23 permet la révision du taux dès lors que son maintien conférerait un avantage au centre et ce, quelle que soit la cause de l'avantage.

(30) La Commission accueille également favorablement la publication systématique des décisions anticipées (voir point 22) qui accroîtra la transparence du système, notamment quant aux taux de marge fixés pour chacune des activités du centre.

(31) Pour ces raisons et sur base de l'interprétation qu'elle fait de l'article 23 de la loi, la Commission conclut à l'absence d'avantage économique lié à l'application stricte de ces principes. Un des critères de l'article 87 du traité n'étant pas rempli, cette partie du nouveau régime des centres n'est donc pas une aide d'État au sens dudit article.

⁽¹³⁾ En ce qui concerne l'utilisation de méthodes alternatives d'imposition, Cf. point 21, 22 et 27 de la Communication de la Commission sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998).

(32) La Commission précise néanmoins que cette évaluation s'applique au régime tel que présenté par les autorités belges — tenant compte des règles d'établissement des décisions anticipées — et moyennant le respect des engagements pris par la Belgique quant à certaines modalités pratiques d'application du régime. Elle ne couvre en aucun cas d'éventuelles mesures d'application (arrêtés royaux, ministériels, circulaires, etc.) ou décisions anticipées individuelles qui, s'écartant des principes décrits ci-dessus, auraient pour effet d'octroyer un avantage économique à certains centres ou aux entreprises des groupes auxquels ces centres appartiennent. Peu importe à ce sujet que l'avantage intervienne dès l'émission de la décision anticipée ou, par la suite, pendant sa période de validité. Cette décision ne couvre pas non plus les cas où les engagements pris par la Belgique (voir notamment points 12 et 13) ne seraient pas totalement respectés. De telles situations seraient donc susceptibles de constituer des aides d'État illégales sujettes à récupération.

III.1.3. *Traitement des avantages anormaux et bénévoles, Exonérations de précompte mobilier et droit d'apport*

(33) Comme évoqué au point 14, les avantages anormaux ou bénévoles éventuellement consentis aux centres ne font pas partie de la base imposable des centres alors qu'ils font partie de la base imposable de toute société établie en Belgique et soumise au régime fiscal de droit commun. Par ailleurs, aux termes de l'article 5, paragraphe 4 nouveau de l'arrêté royal n° 187, les centres de coordination sont exonérés de précompte mobilier sur les revenus mobiliers qu'ils distribuent ainsi que du droit d'enregistrement sur les apports. Comme évoqué ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que ces exonérations inscrites dans le nouveau régime des centres de coordination satisfont cumulativement aux quatre critères caractéristiques d'un régime d'aide tels que précisés par l'article 87, paragraphe 1, CE.

III.1.3.1. *Avantage économique*

(34) En premier lieu, ces mesures d'exonération semblent procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises.

a) Exonération des avantages anormaux et bénévoles

(35) La Commission estime à ce stade que la non imposition, dans le chef des centres, des avantages anormaux et bénévoles qui leur sont consentis, entraîne une diminution de l'impôt sur les revenus des sociétés⁽¹⁴⁾ qui constitue une charge qui grève normalement le budget des sociétés établies en Belgique. La Belgique estime que ces avantages ne doivent pas être ajoutés aux bénéfices (base cost plus) des centres car ils doivent être taxés dans l'État où est établie la société qui octroie l'avantage anormal ou bénévole. La Commission formule des doutes au sujet de ce raisonnement. Ainsi, si la société X — établie en Belgique et soumise au régime fiscal de droit commun — bénéficie d'avantages anormaux et bénévoles octroyés par la société

Y (établie en Belgique ou à l'étranger), elle est automatiquement imposée sur ces avantages. En effet, que l'avantage consenti par Y consiste à supporter une charge incombant à X ou à rétribuer certaines ventes de X au-dessus du prix de pleine concurrence, cet avantage se traduit nécessairement par une augmentation du bénéfice comptable de la société X qui le reçoit. Le bénéfice imposable de la société X, calculé à partir de son bénéfice comptable, comprend également ces avantages qui sont donc automatiquement imposés dans le chef de X.

(36) La Belgique fait valoir que cette imposition initiale sera détaxée par la suite dans le chef de X par le jeu des instruments internationaux préventifs de la double imposition. À ce sujet, il semble que cette rectification n'intervienne pas dans tous les cas, et que, le cas échéant, elle intervienne plusieurs années après l'imposition initiale. Ainsi, il semble que la rectification n'intervient pas lorsqu'il n'y a pas eu d'imposition effective, comparable et préalable de l'avantage dans le chef de la société Y qui l'a consenti puisqu'il n'y a pas de risque de double imposition. La rectification n'aura pas lieu non plus lorsque la Belgique et l'autre État concerné ne sont pas liés par un instrument international permettant d'opérer une telle rectification par la voie de l'échange spontané de renseignements (convention bilatérale⁽¹⁵⁾, directive européenne, etc.). Dans ces circonstances, la société X supporte définitivement l'imposition initiale des avantages reçus, alors qu'un centre est définitivement exonéré d'impôt sur ces avantages.

(37) Alternativement, lorsque la rectification intervient dans le chef de la société X, elle intervient généralement après plusieurs années, le temps nécessaire pour qu'il y ait imposition dans l'autre État et que le mécanisme de rectification prévu par les conventions préventives de double imposition aboutisse. Entre-temps, la société X supporte la charge de l'impôt. Dans les mêmes circonstances, le centre est simplement exonéré d'impôt sur ces avantages et ne supporte donc jamais la charge correspondante de l'impôt sur les revenus. Cette différence de traitement semble introduire, au profit des centres de coordination, un avantage de trésorerie par rapport à la société X, qui doit financer, même temporairement, l'impôt initialement mis à sa charge.

(38) De plus, l'engagement pris par les autorités belges (voir point 14), d'échanger spontanément des renseignements avec les administrations fiscales étrangères lorsqu'il est supposé qu'une fraude importante a été commise au détriment du fisc d'autres États, ne semble pas suffire pour exclure l'avantage économique lié à l'absence d'imposition initiale des avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres. En effet, cet échange spontané de renseignement est limité aux situations où une fraude importante est suspectée, moyennant l'existence d'un accord d'échange de renseignements et sous réserve de réciprocité. Cet échange ne semble donc pas exclure le risque de «double non-imposition» des avantages consentis aux centres, ni en tout cas, l'avantage de trésorerie lié à l'absence d'imposition initiale à charge des centres.

⁽¹⁴⁾ Impôt des sociétés (ISoc) pour les sociétés résidentes ou Impôt des non résidents/sociétés (INR Soc) selon le cas.

⁽¹⁵⁾ Les conventions bilatérales destinées à éviter la double imposition n'imposent pas un échange systématique de renseignements. Elles laissent le choix des modalités de l'échange (par ex. sur demande, spontané, ou automatique), qui en pratique prend le plus souvent la forme d'un échange sur demande.

(39) Enfin, l'inclusion des avantages anormaux et bénévoles dans la base alternative d'imposition (voir point 15) ne semble pas non plus exclure l'existence d'un avantage dans le chef des centres. En effet, les avantages anormaux reçus par les centres ne sont effectivement imposés que si le montant de la base alternative dépasse le montant de la base cost plus. De plus, dès lors que cette base ne s'ajoute pas mais se substitue à la base cost plus, il semble que les avantages constatés ne sont imposés que dans la mesure du dépassement ou que la base cost plus, base principale, est alors négligée et par conséquent exonérée d'impôt.

(40) Par conséquent, la Commission estime, à ce stade, que l'absence d'imposition initiale des avantages reçus par les centres peut leur procurer un avantage. La Commission considère également qu'à défaut de transmission spontanée, l'avantage octroyé aux centres — par la non taxation en Belgique des avantages anormaux et bénévoles qui leur sont consentis — persisterait. La Commission rappelle que cet avantage économique est susceptible de constituer une aide d'État non couverte par la présente décision.

b) Exonération du précompte mobilier

(41) Les autorités belges estiment que les centres de coordination ne bénéficient d'aucun avantage économique au sens de l'article 87. En effet, en raison du grand nombre d'exceptions à la retenue du précompte mobilier, la Belgique considère que l'on ne peut considérer que le précompte est une charge qui grève normalement le budget des entreprises établies en Belgique. Ces exonérations ont pour effet d'exonérer la plupart des revenus mobiliers distribués ou reçus par des sociétés établies en Belgique. C'est notamment le cas des exonérations accessibles aux «investisseurs professionnels» au sens de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après AR/CIR92) où aux personnes non-résidentes.

(42) La Commission estime, à ce stade, que la retenue d'un précompte mobilier est la règle inscrite dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après «CIR92»). Le précompte mobilier semble donc être une charge grevant normalement le budget des entreprises, résidentes ou non, qui perçoivent — dans les situations prévues par le droit commun belge — des revenus mobiliers de source belge. Le CIR92 établit de même que les sociétés résidentes et les succursales belges qui distribuent de tels revenus sont redevables du précompte.

(43) Dans la mesure où l'exonération des revenus distribués par les centres va au-delà des exonérations prévues par le droit commun applicable en Belgique, elle semble conférer un avantage économique aux centres et aux groupes auxquels ils appartiennent. L'avantage lié à cette exonération résulterait, dans le chef du bénéficiaire des revenus et selon les cas, du report du paiement de l'impôt final voire de l'absence d'imposition en Belgique sur les revenus mobiliers concernés.

(44) Les arguments développés jusqu'à présent par l'État belge ne semblent pas pouvoir être accueillis favorablement pour les raisons suivantes.

(45) Premièrement, l'existence d'exonérations accessibles à certaines entreprises ne peut être justifiée par l'existence d'autres exonérations. À cet égard, peu importe que les

sociétés exonérées soient plus nombreuses que celles qui paient ou doivent retenir le précompte. Cette affirmation n'a d'ailleurs été étayée par aucune donnée chiffrée. Dès lors que des différences existent dans l'application du précompte mobilier et que les exonérations donnent un avantage à leurs bénéficiaires par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas, ces différences tombent potentiellement sous le coup de l'article 87 du traité et il importe de déterminer si l'avantage susceptible d'être constaté en l'espèce est une aide, et si c'est le cas d'en évaluer la compatibilité avec le marché commun. Ainsi, les exonérations invoquées peuvent alternativement ne pas constituer une aide, être une aide compatible avec le marché commun voire une aide incompatible mise illégalement en œuvre par la Belgique. En particulier, la Commission tient à souligner le contenu de sa décision SG(83) D/12 adressée à la Belgique le 3 janvier 1983 au sujet du régime des sociétés établies en zone d'emploi. Cette décision indique que la Commission a constaté que l'exonération du droit d'enregistrement tombe sous le coup de l'interdiction générale des aides énoncée à l'article 92 (devenu article 87), paragraphe 1, du traité, avant de déclarer ces aides compatibles dans le cas d'espèce. Ce principe a encore été rappelé dans la décision⁽¹⁶⁾ SG(2000) D/108799, également adressée à la Belgique.

(46) Deuxièmement, les exonérations invoquées par l'État belge sont, dans leur grande majorité, accordées sous des conditions strictes et moyennant certaines formalités. Ces exonérations ne suffisent pas à donner à tous les bénéficiaires des revenus distribués par les sociétés établies en Belgique, les avantages accordés aux bénéficiaires des revenus distribués par les centres. Ces exonérations semblent d'ailleurs rarement accordées en raison de la seule qualité du débiteur des revenus, mais le cas échéant, en raison de la qualité du bénéficiaire. En outre, les exonérations octroyées aux investisseurs professionnels établis en Belgique semblent limitées aux revenus de créances et prêts perçus et ne porteraient donc pas sur les dividendes et redevances. De même, les exonérations accordées aux revenus distribués aux personnes non résidentes semblent essentiellement se limiter aux épargnants non résidents de telle sorte que la comparaison n'est pas pertinente dans le cadre de cette analyse. Il semble en effet peu probable que l'épargnant non résident constitue le bénéficiaire typique des revenus distribués par les centres de coordination de groupes multinationaux.

(47) Troisièmement, la limitation de l'exonération aux cas où le bénéficiaire peut être identifié comme n'étant pas une personne physique, une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, ni une personne morale non-résidente ne vise apparemment que les personnes physiques et les associations sans but lucratif ou entités assimilées. Les sociétés, résidentes ou non, bénéficieraient de l'exonération de précompte sans autre condition que celle d'être identifiée. Or, il semble que selon le droit commun, le précompte constitue l'impôt belge définitif non seulement pour les revenus distribués à des épargnants — personnes physiques — ou à des associations soumises à l'impôt des personnes morales mais également pour les revenus distribués à des sociétés non-résidentes qui ne peuvent en obtenir l'imputation ou le rembourse-

⁽¹⁶⁾ N 226/2000 régime d'aide à finalité régionale de la loi du 30 décembre 1970.

ment dans le pays de destination de ces revenus. Dans le cas présent, l'exonération accordée aux revenus distribués par les centres bénéficierait notamment aux sociétés établies à l'étranger, dans la mesure où le précompte constitue normalement dans leur chef un impôt définitif.

(48) Ainsi, à titre illustratif et non exhaustif, il semble que les revenus suivants sont exonérés de précompte mobilier s'ils sont distribués par les centres et ne le sont pas s'ils sont distribués par les sociétés soumises au droit commun:

- les dividendes distribués à une société établie en Belgique en dehors des conditions fixées par l'article 106, paragraphe 6 AR/CIR92;
- les dividendes distribués à une société établie dans un autre État membre en dehors des conditions établies par l'article 106 paragraphe 5 AR/CIR92 en application de la directive 90/435/CEE;
- les revenus mobiliers distribués à une société établie dans un des nombreux pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui prévoit une retenue à la source, même réduite;
- les revenus mobiliers distribués à une société non-résidente établie hors de l'Union européenne, dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention préventive de la double imposition;

(49) Toute autre chose égale par ailleurs, cette différence de traitement semble avantager directement les bénéficiaires des revenus distribués par les centres qui perçoivent le revenu brut, sans déduction du précompte. De ce fait, pour les mêmes opérations et dans les mêmes conditions, les centres semblent pouvoir offrir des revenus plus élevés que les autres sociétés établies en Belgique. Ces bénéficiaires ne peuvent profiter de l'avantage de l'exonération qu'en réalisant l'opération ou en investissant leur capital dans un centre. Les exonérations de précompte mobilier placent donc les centres de coordination et les groupes possédant de tels centres dans une position privilégiée sur les marchés.

(50) En ce qui concerne le groupe, l'avantage direct lié à l'absence de précompte mobilier est également une amélioration de la situation financière des sociétés du groupe bénéficiaires des revenus exonérés et, par conséquent, une amélioration globale de la situation financière du groupe. L'amélioration de la situation financière du groupe semble se traduire par une meilleure notation du groupe en tant que débiteur qui, lui permettant à son tour d'obtenir des conditions plus favorables sur le marché financier, renforcerait encore sa position financière et celle du groupe entier.

(51) Le gouvernement belge fait par ailleurs remarquer que l'abolition des précomptes est préconisée par la Commission et que le régime des centres de coordination va dans ce sens. Cet argument fait référence au contexte général de l'harmonisation alors que l'examen du régime des centres de coordination doit prendre place dans le contexte du droit fiscal commun actuellement appliqué en Belgique. Or, le droit commun belge repose toujours sur le principe de la retenue d'un précompte sur les

revenus mobiliers. S'il va dans la bonne direction, ce pas semble effectué de manière sélective en donnant un avantage aux centres par rapport aux autres sociétés établies sur le territoire belge.

c) Exonération du droit d'apport

(52) En ce qui concerne le droit d'apport, les articles 115 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe semblent indiquer que la règle en Belgique est l'imposition des apports et augmentations de capital. Ceci semble en outre confirmé par les dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux⁽¹⁷⁾ qui prévoit que les États membres qui optent pour le maintien du droit d'apport, ce qui est le cas de la Belgique, perçoivent ce droit sur tous les apports à des sociétés de capitaux — sous réserve des opérations exonérées selon la directive — à un taux unique ne dépassant pas 1 %. Par conséquent, le droit d'enregistrement proportionnel semble constituer une charge normalement supportée par le budget de toute société de capitaux procédant en Belgique à des apports ou augmentations de capital. L'exonération de cette taxe semble donc procurer un avantage aux centres ou aux entreprises multinationales dont ils font partie par rapport aux autres sociétés de capitaux procédant en Belgique à de telles opérations.

(53) La Belgique conteste que le droit d'apport grève normalement le budget des entreprises et invoque pour le démontrer l'existence dans le droit belge d'autres exonérations de droit d'apport et notamment celles octroyées aux sociétés établies en zone d'emploi et celles accompagnant l'octroi de certains subsides visant à favoriser l'investissement et l'emploi en Belgique. Selon les autorités belges, la plupart des opérations d'apport bénéficient en Belgique de l'une ou l'autre de ces exonérations et il n'y a donc pas d'avantage spécifique pour les centres. À ce propos la Commission estime qu'une exonération ne peut être valablement justifiée par la seule existence d'autres exonérations, même nombreuses. Chaque avantage doit être analysé, au regard des règles applicables en matière d'aides d'État, selon les modalités et circonstances propres à son octroi. Ainsi, les exonérations invoquées peuvent alternativement ne pas constituer une aide, être une aide compatible avec le marché commun voire une aide incompatible mise illégalement en œuvre par la Belgique. En particulier, la Commission tient à souligner le contenu de sa décision SG(83) D/12 adressée à la Belgique le 3 janvier 1983 au sujet du régime des sociétés établies en zone d'emploi. Cette décision indique que la Commission a constaté que l'exonération du droit d'enregistrement tombe sous le coup de l'interdiction générale des aides énoncée à l'article 92 (devenu article 87), paragraphe 1, du traité, avant de déclarer ces aides compatibles dans le cas d'espèce. Ce principe a encore été rappelé dans la décision⁽¹⁸⁾ SG(2000) D/108799, également adressée à la Belgique.

⁽¹⁷⁾ Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts directs frappant les rassemblements de capitaux, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 249 du 3.10.1969, p. 25).

⁽¹⁸⁾ N 226/2000 régime d'aide à finalité régionale de la loi du 30 décembre 1970.

(54) Pour justifier l'octroi de l'exonération du droit d'apport, la Belgique fait également référence à certaines opinions exprimées par le Conseil et la Commission en faveur de la suppression du droit d'apport. Cette référence semble pour le moins paradoxale dès lors que le paiement de ce droit semble être la règle applicable en Belgique. L'exonération des centres semble au mieux pouvoir être considérée comme un pas dans la direction indiquée, mais ce pas semble effectué de manière discriminatoire favorisant les centres à l'égard des autres sociétés établies sur le territoire belge.

III.1.3.2. Utilisation de ressources d'État

(55) En second lieu, l'avantage doit être octroyé au moyen de ressources de l'État. Dans le cas présent, il semble que les exonérations décrites ci-dessus entraînent — directement ou en différant le paiement de l'impôt — une diminution des ressources de l'État.

(56) À ce propos, l'augmentation attendue des ressources fiscales globales de l'État belge suite à la mise en place de ces exonérations ne semble pas pouvoir être prise en compte car le caractère d'aide d'une mesure doit s'évaluer individuellement au niveau de l'entreprise bénéficiaire — et à un moment donné — afin de déterminer si certaines entreprises reçoivent plus de l'État ou contribuent moins au financement des biens et services publics.

III.1.3.3. Distorsion de la concurrence et affectation des échanges intra-communautaires

(57) La Commission estime également à ce stade que les avantages décrits dans la présente décision entraînent ou menacent d'entraîner une distorsion de concurrence entre les sociétés établies en Belgique et que, le cas échéant, cette distorsion de concurrence affecterait les échanges intra-communautaires. En effet, selon la jurisprudence de la Cour ⁽¹⁹⁾ et comme souligné au point 11 de la communication, le simple fait que l'aide renforce la position de cette entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-communautaires permet de considérer que ces échanges ont été affectés.

(58) À ce propos, les avantages dont bénéficient les centres semblent en effet renforcer leur position concurrentielle dans le secteur des services qu'ils rendent aux membres du groupe — où ils sont notamment en concurrence directe avec les organismes financiers, fiduciaires et cabinets de conseil spécialisés en fiscalité, recrutement, informatique, etc. — ainsi que la position concurrentielle des autres sociétés du groupe dans les nombreux secteurs de l'économie où elles sont actives. Tous ces secteurs font l'objet d'un commerce international et intracommunautaire intense et les grandes sociétés multinationales y sont en concurrence directe avec d'autres entreprises multinationales ou locales de toutes tailles.

(59) En outre l'existence de dispositions comparables ou concurrentes dans d'autres États membres ne peut constituer une justification à l'octroi d'aides d'État. Comme le régime des centres, chaque mesure doit s'analyser dans le contexte du système fiscal de l'État membre concerné.

(60) Enfin, le groupe bénéficie de manière directe et indirecte des avantages financiers octroyés par le régime fiscal des centres de coordination. Ces avantages renforcent la position financière du groupe qui, par voie de conséquence, est susceptible d'influencer en faveur de ce groupe, le rating effectué par les banques, renforçant encore sa position financière par l'accès à des conditions plus favorables.

III.1.3.4. Sélectivité/spécificité de la mesure

(61) Enfin, la mesure doit être sélective ou spécifique en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(62) Les avantages décrits ci-dessus semblent spécifiques car ils semblent favoriser certaines entreprises au sens de l'article 87 du traité. Le régime vise directement les centres de coordination et, directement ou indirectement, les autres sociétés du groupe multinational auxquels ces centres doivent nécessairement appartenir. La sélectivité ne résulterait donc pas de critères régionaux ou sectoriels mais des critères contraignants auxquels doivent répondre les centres et les groupes auxquels ils appartiennent pour obtenir l'agrément et ainsi bénéficier du régime (voir point 8) et notamment les critères relatifs à la taille du groupe et à la nature et au caractère intra-groupe des activités exercées. La définition du caractère multinational qui sera déterminée ultérieurement par arrêté royal pourrait encore renforcer cette sélectivité.

(63) Dans la mesure où les dispositions fiscales en cause ne concernent que les centres de coordination de groupes multinationaux répondant en outre à certaines conditions en termes de chiffres d'affaires et de fonds propres investis, elles ne s'appliquent pas:

- aux entreprises exerçant d'autres fonctions que celles autorisées par l'arrêté royal n° 187;
- aux éventuels groupes d'entreprises qui ne rempliront pas les critères de multinationnalité;
- aux groupes d'entreprises ne répondant pas aux critères de fonds propres investis et de chiffre d'affaires réalisé;
- aux entreprises du secteur financier.

Justification par la nature et l'économie du système

(64) Comme le souligne le point 23 de la Communication précitée, «la nature différentielle de certaines mesures ne doit pas forcément les faire considérer comme des aides d'État». Certaines mesures apparaissant comme des aides peuvent en effet s'avérer justifiées au regard de la nature et de l'économie du système. La Communication poursuit: «Il appartient toutefois à l'État membre de fournir une telle justification.». La Commission considère qu'aucun des arguments fournis à ce stade par les autorités belges ne permet de justifier les exonérations visées par la nature ou l'économie du système fiscal belge, ni par conséquent d'établir qu'elles constitueraient des mesures générales plutôt que sélectives.

⁽¹⁹⁾ Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Recueil 1980, p. 2671.

(65) Les autorités belges illustrent par un exemple chiffré la nécessité d'exonérer les sociétés en général — et les centres en particulier — du précompte mobilier en raison du nombre important d'opérations financières effectuées chaque année. À défaut d'exonération, les montants de précompte retenus excèderaient de loin le montant de l'impôt dû pour l'année entière, et l'État belge se verrait dans l'obligation de rembourser des sommes importantes à toutes les sociétés du royaume. Ce phénomène serait accentué dans le cas des activités de centralisation de trésorerie (cash pooling) assumées par les centres. Cet exemple ne semble pas pertinent en l'espèce. Il considère, à tort, que la société bénéficiaire des revenus paie l'impôt en Belgique mais dans ce cas, le droit commun suffit à exonérer l'opération de précompte. D'autre part, la présente procédure ne vise pas les exonérations — nombreuses — prévues par le droit commun et qui resteront accessibles aux centres mais uniquement les exonérations supplémentaires accessibles aux seuls centres. Le risque que les centres doivent retenir un précompte sur tous les revenus distribués semble donc limité aux cas où tous les revenus seraient distribués à des contribuables ne pouvant bénéficier des exonérations générales prévues par le droit belge, communautaire et les conventions internationales conclues par la Belgique. Et dans cette hypothèse, il semble que le centre serait simplement soumis aux mêmes risques que d'autres sociétés exerçant les mêmes activités dans un groupe qui ne remplit pas les conditions fixées par l'arrêté royal n° 187.

III.2. Aide nouvelle

(66) La Commission considère, à ce stade, que les exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport sont des aides nouvelles pour trois raisons principales. Premièrement, ces exonérations font partie intégrante du projet notifié en ce qu'il modifie l'article 5 de l'arrêté royal n° 187. Deuxièmement, la procédure menant à l'agrément des centres et leur renouvellement a également été modifiée et la condition relative au caractère multinational des groupes éligibles devra encore être fixée par un arrêté royal ultérieur. L'entrée en vigueur du régime modifié sera également fixée ultérieurement par arrêté royal. Troisièmement, par sa décision finale négative du 17 février 2003, la Commission a déclaré illégales l'application de l'ancienne méthode cost plus et les exonérations prévues par l'ancien régime des centres de coordination. Les exonérations prévues par le nouveau régime ne peuvent donc pas être la continuation des aides existantes prévues par l'ancien régime.

(67) Par conséquent, aucune des situations définies à l'article 1^{er} lettre b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE ⁽²⁰⁾ ne semble trouver à s'appliquer.

III.3. Compatibilité avec le marché commun

(68) Dans la mesure où les exonérations fiscales applicables aux centres de coordination semblent constituer des aides d'État au sens de l'article 87.1 du traité, il y a lieu

de porter une première appréciation sur son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité.

(69) À ce stade, le régime des centres de coordination ne semble correspondre à aucune des exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 2 car le régime ne s'adresse pas aux consommateurs individuels, ne semble pas viser à remédier à des dommages causés par des événements extraordinaires ni à une perturbation grave de l'économie belge. Les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, lettres b), d) et e) ne semblent pas applicables en l'espèce car les exonérations considérées ne visent ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni la culture ou la conservation du patrimoine. Elles ne font pas non plus partie d'une catégorie d'aides déclarée compatible par le Conseil sur proposition de la Commission.

(70) En ce qui concerne l'application des exceptions de l'article 87, paragraphe 3, lettres a) et c), les autorités belges estiment que le régime des centres de coordination est lié à la réalisation d'investissements et à la création d'emplois. L'installation d'un centre de coordination constituerait, selon les autorités belges, un investissement humain, financier, matériel et immobilier. En outre, une des conditions de l'agrément des centres est l'occupation de l'équivalent d'au moins dix travailleurs à temps plein à l'expiration des deux premières années d'activité du centre de coordination.

(71) La Commission constate qu'à ce stade, aucun élément n'a été fourni permettant d'établir que les investissements réalisés par les centres correspondent à des investissements initiaux éligibles tels que définis aux points 4.4 et 4.5 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale ⁽²¹⁾. Les aides à l'investissement ne sont par ailleurs autorisées, en ce qui concerne les grandes entreprises dont font partie la plupart des centres, que dans les régions éligibles aux dérogations prévues à l'article 87, points a) et c). Enfin, en ce qui concerne la création d'emploi, les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ⁽²²⁾ disposent que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emplois. En l'espèce, la Commission constate que le montant des avantages fiscaux procurés par le régime semble dépendre du volume d'activité généré par le centre plutôt que du nombre d'emplois créés.

(72) Les avantages fiscaux accordés aux centres ne semblent pas liés à la réalisation d'investissements, ni à la création d'emplois ou de projets spécifiques. Ils constitueraient donc des allègements de charges continus constitutifs d'aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement sont, en principe, interdites. Par exception, le point 4.15 des lignes directrices relatives aux aides régionales précise que des aides peuvent cependant être octroyées dans certaines conditions dans les régions bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a). La Belgique ne bénéficiant pas de cette dérogation, les

⁽²⁰⁾ JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

⁽²¹⁾ JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

⁽²²⁾ JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

aides en question semblent susceptibles d'altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et, dans ces circonstances, ne sauraient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c). Dans le cas d'espèce, la comparaison avec le régime des zones d'emploi autorisé par la Commission en 1982 ne semble pas pertinente pour défendre la compatibilité de la mesure avec le marché commun dès lors que cette décision ne concernait que les zones d'emploi wallonne et flamande caractérisées, à l'époque, par un chômage important. La création d'une zone d'emploi dans la région de Bruxelles avait, elle, été catégoriquement exclue par la Commission. Or, la plupart des centres sont établis dans cette région.

(73) Les exonérations en question ne semblent pouvoir a priori bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87 du traité. En conséquence, la Commission exprime ses doutes quant à la compatibilité du régime fiscal des centres de coordination avec le marché commun.

(74) En outre, en ce qui concerne l'exonération du droit d'enregistrement dont bénéficient les centres de coordination, la Commission s'interroge également sur sa compatibilité avec les dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux⁽²³⁾. Cette directive prévoit en effet un cadre très strict selon lequel les États membres qui optent pour le maintien du droit d'apport, ce qui est le cas de la Belgique, perçoivent ce droit sur tous les apports à des sociétés de capitaux — sous réserve des opérations exonérées selon la directive — à un taux ne dépassant pas 1 %. Il semble que l'exonération de droit d'enregistrement proportionnel réservée aux centres ne remplisse aucune des conditions prévues pour une exonération spécifique et qu'elle serait donc en contravention avec ladite directive. Si la mesure notifiée s'avérait contrevenir à la directive 69/335/CEE, la

Commission ne pourrait en aucun cas la déclarer compatible avec le marché commun.

IV. DÉCISION

(75) La Commission a décidé

— En premier lieu, que l'octroi d'agréments et de décisions anticipées aux centres ainsi que la détermination forfaitaire de leur revenu imposable à l'impôt des sociétés (résidentes ou non) dans le cadre décrit dans la présente décision ne constituent pas, en principe, des mesures d'aide.

— En second lieu, que les doutes qui persistent quant à la compatibilité des mesures d'exonération prévues en matière d'avantages anormaux et bénévoles reçus par les centres, de précompte mobilier et de droit d'apport, justifient que la procédure formelle d'examen soit ouverte à l'égard de ces mesures.

(76) La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(77) Par la présente, la Commission avise la Belgique qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au *Journal officiel de l'Union européenne*. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»

⁽²³⁾ Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts directs frappant les rassemblements de capitaux, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 249 du 3.10.1969, p. 25).

AYUDA ESTATAL — ESPAÑA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 47/03 (ex NN 49/03) — España — Garantías de entrega para tres gaseros destinados al transporte de gas natural licuado (GNL)

(2003/C 209/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 9 de julio de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a tres garantías de entrega concedidas por la SEPI para tres gaseros destinados al transporte de gas natural licuado (GNL).

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Ayudas estatales
J-70, 4/151
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

En marzo del 2000 la Comisión tuvo conocimiento de que tres garantías habían sido concedidas por la sociedad pública española SEPI a REPSOL/Gas Natural (en adelante «Repsol») en relación con la construcción y entrega de tres buques gaseros encargados a astilleros públicos que en aquel momento pertenecían a Astilleros Españoles (en adelante «AESA») pero que ahora forman parte del grupo IZAR. Tanto AESA como IZAR son propiedad al cien por cien de la SEPI.

Las garantías concedidas por la SEPI cubren los mismos daños y perjuicios que AESA se comprometió a indemnizar a Repsol de conformidad con una cláusula adicional a cada contrato de construcción. Los contratos de construcción y los contratos de garantía de entrega se firmaron el 31 de julio del 2000 y prevén que los buques se entregarán, respectivamente, el 15 de septiembre del 2003, el 15 de diciembre del 2003 y el 15 de marzo del 2004.

Con arreglo a cada garantía la SEPI indemnizará a Repsol por todos los costes directos e indirectos y las pérdidas derivadas en las que Repsol pudiera incurrir si los buques no son entregados según las condiciones de los contratos de construcción. Las

garantías cubren un importe máximo de unos 180 millones de euros por buque, es decir, un total máximo aproximado de 540 millones. Además las garantías concluyen 12 meses después de la entrega prevista de los buques respectivos. Por otra parte, los contratos de garantía no prevén el pago de ninguna prima.

Con respecto a los astilleros la Comisión observa que la renuncia al pago de una prima a cambio de una garantía del Estado descarga a los beneficiarios potenciales de costes de funcionamiento normales y puede por ello considerarse como ayuda de explotación. En la práctica, los astilleros necesitaban dar garantías de entrega directamente a Repsol. Sin embargo los compromisos suscritos por AESA/IZAR bajo la cláusula adicional a los contratos de construcción no eran, al parecer, suficientes para Repsol por lo que los astilleros deberían haber recurrido al mercado para obtener las garantías pedidas y haber pagado una prima por estas garantías. Sin embargo, como los astilleros atravesaban dificultades financieras, puesto que AESA era técnicamente insolvente y la situación financiera de IZAR era confusa, la SEPI quizás era la única instancia creíble dispuesta a proporcionar las garantías a Repsol. Por ello la Comisión considera que los astilleros podrían haberse beneficiado de una ayuda estatal. Por otra parte, puesto que Repsol es el beneficiario contractual de las garantías, la Comisión precisa información adicional para excluir la posibilidad de que Repsol pueda haberse beneficiado de la ayuda estatal.

Cualquier ayuda potencial que pueda estar contenida en las garantías de entrega de los gaseros podría ser considerada como ayuda a empresas de construcción naval o similares. Como en la actualidad no es aplicable ninguna derogación al Reglamento sobre construcción naval, cualquier ayuda contenida en las garantías concedidas en relación con los contratos de construcción tendría que considerarse incompatible con el mercado común.

Tras una evaluación inicial, la Comisión tiene dudas de que todas las condiciones que permitirían excluir la existencia de ayuda sean cumplidas por las garantías de entrega de los tres buques. Entre otras, la Comisión tiene dudas sobre si las garantías estatales sin coste ninguno para los beneficiarios (que actúan en un sector para el cual hay un mercado dispuesto a ofrecer tales garantías) no contienen elementos de ayuda estatal.

En conclusión, vistas sus dudas al respecto de los beneficiarios y dado que las garantías no notificadas no parecen cumplir todas las condiciones que permitirían a la Comisión excluir inmediatamente la posibilidad de la existencia de cualquier elemento de ayuda, la Comisión debe completar su examen de tales garantías con el fin de determinar si implican elementos de ayuda estatal compatibles con el mercado común.

TEXTO DE LA CARTA

«La Comisión desea informar a España que, tras examinar la información suministrada por sus autoridades sobre la medida mencionada en el encabezamiento, ha decidido iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

1. PROCEDIMIENTO

1. En marzo de 2000, la Comisión tuvo conocimiento de que el holding público español SEPI había concedido tres garantías (denominadas en lo sucesivo las garantías de entrega o las garantías) a Repsol/Gas Natural (en lo sucesivo Repsol) relacionadas con la construcción y entrega de tres buques gaseros contratados con astilleros públicos pertenecientes en su momento a Astilleros Españoles (en lo sucesivo AESA) y que ahora forman parte del grupo IZAR. AESA e IZAR son propiedad al cien por cien de SEPI.
2. Mediante carta de 23 de marzo de 2000, la Comisión pidió a las autoridades españolas que proporcionaran información sobre dichas medidas. Tras un recordatorio, las autoridades españolas respondieron mediante cartas de 26 de marzo de 2001 y 16 de mayo de 2001. La Comisión pidió más información por cartas de 28 de febrero de 2002, 26 de junio de 2002, 12 de septiembre de 2002, 23 de diciembre de 2002, 4 de febrero de 2003 y 15 de mayo de 2003. Las autoridades españolas contestaron por cartas de 5 de abril de 2002, 1 de octubre de 2002, 13 de febrero de 2003 y 2 de junio de 2003⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Las cartas antes mencionadas se registraron respectivamente el 28 de marzo de 2001, 17 de mayo de 2001, 10 de abril de 2002, 7 de octubre de 2002, 13 de febrero de 2003 y 2 de junio de 2003.

3. Sin embargo, las autoridades españolas no facilitaron una parte de la información específica solicitada por la Comisión mediante carta de 23 de diciembre de 2003 y carta de recordatorio de 15 de mayo de 2003.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA DE AYUDA

2.1. Antecedentes

4. En 1999, Repsol adjudicó a tres armadores sendos contratos de fletamento buque gasero, con opción a un tanquero adicional, según un régimen de «fletamento por tiempo determinado» a largo plazo.
5. Posteriormente, se iniciaron las negociaciones entre los armadores y los constructores navales con vistas a la construcción de los tres gaseros antes mencionados. El 31 de julio de 2000, los tres contratos para la construcción de los buques gaseros se adjudicaron a dos astilleros públicos españoles cuya propiedad se acababa de transferir de AESA a IZAR y se firmaron los contratos de construcción naval.
6. El 31 de julio de 2000, AESA firmó una cláusula adicional a los contratos de construcción naval por la cual se comprometía a indemnizar a Repsol por los costes específicos en que este último incurriría si no se entregaban los buques gaseros según lo estipulado en los contratos de construcción naval. Ese mismo día, de conformidad con una decisión de su Consejo tomada el 3 de marzo de 2000, SEPI concedió a Repsol unas garantías que cubrían las mismas responsabilidades que las contempladas en la cláusula adicional a los contratos de construcción naval firmados por AESA. Así pues, parece que en realidad las garantías de SEPI se conceden para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de AESA con Repsol.
7. Dado que el 20 de julio de 2000, AESA vendió a IZAR los dos astilleros responsables de la construcción de los buques gaseros, parece que AESA no podía responder de los citados compromisos contractuales, sino que más bien lo hacían IZAR o los astilleros. Por carta de 13 de febrero de 2003, las autoridades españolas confirmaron que IZAR había asumido la responsabilidad de los compromisos de AESA derivados de los contratos de construcción naval.

2.2. Estipulaciones y condiciones

8. De conformidad con las estipulaciones de cada garantía, SEPI indemnizará a Repsol en cuanto ésta lo solicite por todos los costes directos, indirectos y las consiguientes pérdidas de Repsol⁽²⁾ si no se entregan los buques con arreglo a las condiciones del contrato. Sin embargo, las garantías tienen un límite de aproximadamente 180 millones de euros por buque, es decir, un total máximo de aproximadamente 540 millones de euros.

⁽²⁾ Los daños y perjuicios incluidos directos e indirectos y consecuentes que Repsol/Gas Natural sufra, incluyen el extracoste padecido por Repsol en la contratación de transporte alternativo de gas natural líquido, las cantidades de GNL no adquiridas por Repsol a Atlantic LNG con arreglo al contrato «Take or pay» y los perjuicios sufridos por Repsol derivados del incumplimiento de sus contratos con Atlantic LNG, los costes incurridos en la contratación de suministro alternativo de LNG con objeto de ajustarse a los términos de «Take or Pay», los daños y perjuicios sufridos por Repsol derivados de la falta de aprovisionamiento a sus clientes, los daños y perjuicios sufridos en su calidad de accionista de Atlantic LNG y/o BP Amoco Energy y como accionista de centrales eléctricas españolas que habrían utilizado el gas suministrado por los gaseros construidos por AESA, y los daños sufridos por Gas Natural y Gas Natural Euskadi al no poder vender el GLN.

2.3. Precio y duración de la garantía de entrega

9. Los contratos de garantía de entrega no prevén el pago de ninguna prima. Por otra parte, las garantías de entrega cubren los 12 meses siguientes a la entrega prevista de los respectivos buques.

2.4. Condiciones suspensivas

10. Conforme a los contratos de garantía, la responsabilidad de SEPI sólo puede suspenderse en caso de «fuerza mayor» ajena a la actividad empresarial de AESA/IZAR y de su grupo.

3. COMENTARIOS DE ESPAÑA

11. Las autoridades españolas mantienen que las garantías de entrega no contienen ningún elemento de ayuda estatal por las cuatro razones siguientes.
12. En primer lugar, España sostiene que las garantías no falsean la competencia y no favorecen a determinadas empresas o la producción de ciertas mercancías dado que las garantías se concedieron después de que los armadores y AESA llegasen a un acuerdo comercial referente al pedido de los buques gaseros.
13. En segundo lugar, España declara que las garantías son de naturaleza comercial y no están vinculadas a la construcción de los buques gaseros sino que simplemente cubren los daños y los perjuicios sufridos por Repsol en caso de que los buques gaseros no se entreguen según lo estipulado en los contratos de construcción naval. Además, España afirma que esos riesgos también están cubiertos por los contratos entre los armadores y Repsol.
14. En tercer lugar, según España, las garantías concedidas por SEPI cumplen el principio del inversor en una economía de mercado porque las garantías se concedieron simplemente para igualar las condiciones ofrecidas por los accionistas de los astilleros surcoreanos a los que se habían pedido buques similares.
15. Finalmente, España sostiene que las garantías no se concedieron sin contrapartida. Esto se debe a que en caso de ejecución de las garantías, SEPI puede reclamar una compensación del armador o de cualquier otra parte responsable.

4. EVALUACIÓN

4.1. Existencia de la ayuda estatal

16. Según el apartado 1 del artículo 87 de Tratado CE «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

4.1.1. Transferencia de recursos estatales

17. La Comisión observa inicialmente que SEPI es un holding público que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Por este motivo se considera que es una empresa pública ya que debido a su propiedad o su participación financiera, los poderes públicos pueden ejercer directa o indirectamente una influencia dominante en la SEPI.
18. Además, considerando el estatuto jurídico de SEPI, la intensidad del control ejercido por los poderes públicos sobre la gestión y la naturaleza de sus actividades, su depen-

dencia directa del Ministerio de Hacienda, su reiterada conducta en el pasado con los astilleros públicos españoles que se ha desarrollado de una manera que puede considerarse directamente imputable al Estado y la posibilidad de que las garantías que nos ocupan no hayan sido concedidas en condiciones de mercado, la Comisión considera que las citadas garantías son imputables al Estado y constituyen ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Por tanto, los fondos utilizados por SEPI se deben considerar recursos estatales.

4.1.2. Beneficio económico

19. Las medidas evaluadas consisten en tres garantías individuales que cubren los posibles perjuicios sufridos por Repsol en relación con la ejecución incorrecta de tres contratos comerciales de construcción naval firmados por dos astilleros públicos españoles propiedad al cien por cien de SEPI a través de su filial al cien por cien AESA/IZAR. Tales garantías del Estado pueden conferir ventajas económicas a determinadas empresas, es decir, a los astilleros o a Repsol. Efectivamente, tales ventajas pueden facilitar a los astilleros o a Repsol ciertas actividades que de lo contrario no podrían desarrollar, o facilitar dichas actividades merced a unos costes de funcionamiento inferiores a lo normal. Concretamente, si no se paga ninguna prima por las garantías del Estado, éste alivia a las empresas beneficiarias de una parte de sus costes de funcionamiento normales, lo cual constituye ayuda independientemente de que la garantía se denomine comercial, financiera o de cualquier otra manera.
20. Así pues, en contradicción con el segundo argumento de España, la Comisión observa que el principal objeto de las garantías es asegurar la correcta ejecución de los contratos de construcción naval y no puede considerarse por separado de dichos contratos. Por otra parte, una garantía que alivia a una empresa de una parte de sus costes de funcionamiento normales constituye ayuda independientemente de que dicha garantía se denomine comercial, financiera o de cualquier otra manera. Por lo que se refiere a la parte del argumento de España según el cual los contratos entre los armadores y Repsol cubren los mismos riesgos que las garantías, la Comisión pidió las copias de estos contratos a España por carta de 23 de diciembre de 2002 y mediante carta de recordatorio de 15 de mayo de 2003 pero no recibió los citados documentos.
21. El argumento del principio del inversor en una economía de mercado invocado por España debe ser rechazado puesto que ningún inversor en una economía de mercado ofrecería garantías a precio cero. Además, la finalidad del test del inversor en una economía de mercado es determinar si los beneficiarios de una ayuda reciben una ventaja económica a la cual no tendrían acceso bajo condiciones normales de mercado. En el presente caso, no cabe ninguna duda de que los astilleros no habrían sido capaces de obtener estas garantías en el mercado. Finalmente, el test de la economía de mercado también plantea la cuestión de si un competidor privado podría haber disfrutado de los mismos beneficios que los beneficiarios de la ayuda. Por otra parte, cabe señalar que hay una contradicción obvia en el argumento de España dado que ésta también afirma que las garantías no están vinculadas a la capacidad de los astilleros de obtener los contratos.
22. Para valorar la ayuda estatal concedida en forma de garantías, la Comisión se basa en el enfoque adoptado en la

Comunicación de 11 de marzo de 2000 relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía («la Comunicación sobre garantías») ⁽³⁾.

23. La Comunicación sobre garantías explica las condiciones necesarias para que las garantías del Estado puedan constituir ayuda estatal. De hecho, la ventaja de las garantías estatales consiste en que es el Estado el que asume el riesgo vinculado a la garantía. La asunción de este riesgo por parte del Estado debería compensarse normalmente con una prima adecuada. Conforme a las disposiciones específicas sobre garantías individuales ⁽⁴⁾, dicha prima equivale a un precio de mercado para la garantía — que refleja entre otras cosas, el importe y la duración de la garantía ofrecida por el prestatario, su situación financiera, el sector de actividad y las perspectivas, los porcentajes de incumplimiento y otras condiciones económicas. El que el Estado renuncie a dicha prima implica para éste una pérdida de recursos y una ventaja para la empresa. De este modo, puede existir una ayuda estatal, a efectos del apartado 1 del artículo 87, aunque el Estado no efectúe ningún pago amparado por una garantía ⁽⁵⁾.
24. La Comisión observa que no se pagó ninguna prima por las garantías y que cabe que los posibles beneficiarios no obtuvieran las garantías en el mercado. Así pues, la Comisión tiene dudas de que las citadas garantías del Estado cumplan actualmente todas las condiciones exigidas en el punto 4.2 de la Comunicación sobre garantías. Sin embargo, según se indica en el punto 4.4 de la citada Comunicación, el hecho de que no se cumpla alguna de estas condiciones no significa que las garantías se consideren automáticamente ayuda estatal.
25. Según lo indicado anteriormente, el elemento clave a la hora de evaluar si una garantía contiene un elemento de ayuda es el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y el precio pagado por el beneficiario por la garantía otorgada constituye ayuda estatal.
26. En su cuarto comentario, España afirma que las garantías de SEPI no se concedieron sin contrapartida porque, en caso de ejecución de las garantías, SEPI puede reclamar una compensación del armador o de cualquier otra parte responsable. Sin embargo, el hecho de que SEPI conserve el derecho a reclamar daños a las partes que hayan podido causar el problema que da lugar al pago de la garantía es una condición básica de cualquier contrato de garantía. Así pues, la Comisión observa que tal afirmación no suprime la necesidad de pagar una prima apropiada por la garantía.
27. Con respecto a la disposición de la Comunicación sobre garantías según la cual el beneficiario debe poder obtener la garantía en condiciones de mercado en los mercados financieros, la Comisión observa que, dado que los astilleros se hallaban en dificultades financieras, que AESA era técnicamente insolvente y que la situación financiera de IZAR era confusa, es posible que SEPI fuera la única parte dispuesta a otorgar las garantías a Repsol. Por lo tanto, la Comisión tiene dudas de que los astilleros hubieran podido obtener las garantías de entrega en el mercado.
28. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión duda de que las garantías de entrega no constituyan en realidad ayuda es-

tatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 Tratado CE.

4.1.3. Efecto en el comercio y en la competencia

29. Conforme a la jurisprudencia reiterada de los tribunales europeos, se cumple el criterio de afectar al comercio si la empresa o empresas beneficiarias ejercen una actividad económica que es objeto de comercio entre los Estados miembros. Dado que existe comercio entre los Estados en el mercado común en el sector en el que operan los beneficiarios potenciales, las medidas pueden entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.
30. Además, la Comisión observa que, contrariamente a lo afirmado en el primer argumento de España, tanto los contratos de construcción naval como los contratos de garantía de SEPI se firmaron el 31 de julio de 2000. Por otra parte, los contratos de garantía declaran que SEPI ya había acordado otorgar esas garantías en marzo de 2000, es decir, antes de la firma de los contratos de construcción naval.
31. Por otra parte, la ventaja económica conferida a los beneficiarios puede, por su propia naturaleza, falsear la competencia dado que — como ya se ha mencionado — las garantías del Estado podían facilitar a estas empresas ciertas actividades que de lo contrario no podrían desarrollar, o facilitar dichas actividades merced a unos costes de funcionamiento inferiores a lo normal. Así pues, la Comisión tiene dudas de que las garantías no falseen la competencia.

4.2. Beneficiarios potenciales

32. Para evaluar y determinar la compatibilidad de la medida, la Comisión debe identificar al beneficiario o beneficiarios de la misma. A este respecto, la Comisión observa que AESA/IZAR se comprometió a compensar a Repsol en concepto de responsabilidades contractuales imputables a los astilleros. Por lo tanto parece que los astilleros podrían ser los beneficiarios en último término.
33. Con respecto a los astilleros, la Comisión observa que el hecho de que se renuncie al pago de una prima por la garantía del Estado alivia a los beneficiarios potenciales de sus costes de funcionamiento normales por lo que pueden beneficiarse de una ayuda de funcionamiento. En la práctica, los astilleros tenían que dar las garantías de entrega directamente a Repsol. Sin embargo, los compromisos suscritos por AESA/IZAR en virtud de la cláusula adicional a los contratos de construcción naval no eran al parecer suficientes para Repsol. Así pues, parece que los astilleros tendrían que haberse procurado en el mercado las garantías pedidas por Repsol y tendrían que haber pagado una prima por estas garantías. Sin embargo, puesto que los astilleros estaban en dificultades financieras, que AESA era técnicamente insolvente y que la situación financiera de IZAR era confusa, es posible que SEPI fuera la única parte dispuesta a otorgar las garantías a Repsol. Por lo tanto, la Comisión opina, por el momento, que los astilleros son los beneficiarios finales de las garantías estatales.
34. Sin embargo, puesto que España sostiene que las garantías se concedieron a favor de Repsol, no se puede excluir en esta fase del procedimiento que Repsol pueda haberse beneficiado de la ayuda. Por lo tanto, la apertura del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE debería abarcar Repsol para permitir la presen-

⁽³⁾ DO C 71 de 11.3.2000, p. 14.

⁽⁴⁾ Vea el punto 4.2. d).

⁽⁵⁾ Puntos 2.1.2 de la Comunicación.

tación de la información adicional que se requiere para despejar las dudas de la Comisión a este respecto.

4.3. Compatibilidad con el mercado común

35. Los apartados 2 y 3 del artículo 87 establecen las condiciones para que una ayuda sea compatible o pueda considerarse compatible con el mercado común. La letra e) del apartado 3 del artículo 87 permite al Consejo determinar las categorías de ayuda que pueden ser compatibles con el mercado común, tomando una decisión por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión. Con la adopción del Reglamento (CE) n° 1540/98 del Consejo ⁽⁶⁾ (el «Reglamento sobre ayudas a la construcción naval»), el Consejo ejerció este poder para determinar las condiciones en las cuales la ayuda concedida directa o indirectamente a la construcción naval puede considerarse compatible con el mercado común. Como el propósito de la presente medida parece ser ayudar al sector de la construcción naval, se debe evaluar de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval.
36. Según el artículo 2 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, cualquier ayuda concedida directamente a astilleros, armadores o a los terceros que se destine a la construcción o conversión naval sólo se considerará compatible si cumple lo dispuesto en el Reglamento.
37. En el presente caso, las garantías están ligadas a la construcción y compra de naves específicas construidas en los astilleros españoles. Así pues, cualquier ayuda contenida en las garantías individuales puede considerarse ayuda de funcionamiento ligada al contrato. Las ayudas de funcionamiento ligadas a los contratos de construcción naval comprenden, entre otros, las ayudas indirectas. Según el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, sólo si se cumple lo dispuesto en el presente Reglamento se considerará compatible con el mercado común la ayuda concedida indirectamente a la construcción naval tal como se define en el presente Reglamento, financiada mediante recursos públicos, cualquiera que sea su forma. Según el apartado 2 del mismo artículo, a los efectos del presente reglamento, la ayuda concedida indirectamente abarca todo tipo de ayuda a los armadores o a terceros para la construcción de buques, tales como garantías. Finalmente, según el artículo 3 el importe total de todas las formas de ayuda concedida para un contrato de construcción naval no debe superar los límites máximos aplicables expresados en los apartados 1 y 2 del mismo artículo. Según el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, las ayudas de funcionamiento para la construcción naval pueden considerarse compatibles con el mercado común solamente hasta el 31 de diciembre de 2000 ⁽⁷⁾. En el presente caso, la Comisión observa que los tres contratos de

construcción naval definitivos se firmaron el 31 de julio de 2000.

38. Se prevé que la entrega de los tres buques tenga lugar más de tres años después de la fecha de la firma de los contratos finales. Así pues, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval el límite máximo de ayuda aplicable a un contrato será el que se encontraba en vigor tres años antes de la fecha de la entrega de los buques. Por lo tanto, los límites máximos de ayuda aplicables son respectivamente el 9 % para los dos buques cuya entrega se prevé en 2003 y para el buque cuya entrega está prevista para 2004 de acuerdo con la decisión de la Comisión en el caso C 33/02 sobre la extensión de los límites de entrega. La Comisión necesita información adicional para comprobar si se cumplen los límites máximos de ayuda a pesar de la concesión de ayuda adicional en forma de garantías. Por lo tanto, la Comisión tiene dudas referentes a la compatibilidad de las tres garantías de entrega con el mercado común.

5. CONCLUSIONES

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, por lo que se refiere a las garantías de entrega concedidas por SEPI en relación con la construcción de tres buques gaseros.

La Comisión insta a España a que, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente carta, proporcione todos los documentos, información y datos necesarios para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda, incluidas las copias de los contratos entre los armadores y Repsol. De no hacerlo así, la Comisión adoptará una decisión sobre la base de la información que obra en su poder. Asimismo, solicita a sus autoridades que envíen inmediatamente una copia de esta carta a los posibles beneficiarios de la ayuda.

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

La Comisión comunica a España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. Asimismo, informará a los interesados de los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.»

⁽⁶⁾ DO L 202 de 18.7.1998, p. 3.

⁽⁷⁾ La Comisión, conforme al artículo 3 del Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, informó a los Estados miembros mediante carta del 6 de noviembre de 2000 que las ayudas de funcionamiento ligadas a los contratos después de 2000 sólo podían concederse para contratos definitivos firmados antes de la mencionada fecha de vencimiento.

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2003/C 209/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión:	11.7.2003
Estado miembro:	Luxemburgo
Ayuda:	N 73/03
Denominación:	Régimen de ayudas en materia de protección del medio ambiente
Objetivo:	Protección del medio ambiente
Fundamento jurídico:	Projet de loi instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables
Presupuesto:	13 millones de euros
Intensidad o importe de la ayuda:	a) inversiones de las PYME con el fin de ajustarse a nuevas normas comunitarias: 15 % ESB b) inversiones que permitan a las empresas superar las normas aplicables: 30 % ESB c) inversiones en materia de energía: 40 % ESB Los límites máximos de intensidad de ayuda de las letras b) y c) se incrementan en 10 % puntos de porcentaje bruto para las PYME
Duración:	Limitada al 31.12.2007

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

III

(Informaciones)

COMISIÓN

Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en línea (2003 a 2004)**(Plan de acción para una Internet más segura)**

(2003/C 209/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

De conformidad con la Decisión nº 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, modificada por la Decisión nº 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet y las nuevas tecnologías en línea mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos, principalmente en el área de la protección de los niños y los menores ⁽¹⁾ (en lo sucesivo denominado «plan de acción para una Internet más segura») la Comisión Europea invita a presentar propuestas de acciones indirectas para su financiación por el programa.

El plan de acción para una Internet más segura se basa en las cuatro líneas de actuación mencionadas en el punto 3 de la presente convocatoria:

- a) creación de un entorno más seguro,
- b) elaboración de sistemas de filtro y clasificación,
- c) sensibilización,
- d) medidas de apoyo al programa.

De conformidad con el artículo 4 de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión Europea ha elaborado un programa de trabajo ⁽²⁾ en el que se presentan de manera detallada los objetivos y las prioridades, así como un calendario indicativo para su puesta en práctica, de tal manera que sirva de base para la ejecución del programa hasta el 31 de diciembre de 2004. Los objetivos, prioridades, presupuestos indicativos y tipos de acciones indirectas que se mencionan en esta convocatoria corresponden a los establecidos en el programa de trabajo.

1. La presente convocatoria se refiere a los siguientes tipos de propuestas:

- Propuestas indicadas en la parte 1 de esta convocatoria, que deben presentarse dentro de un plazo fijo, transcurrido el cual se procederá a la evaluación. Terminado este plazo, no se admitirá ninguna otra propuesta dentro de esta convocatoria.
- Propuestas indicadas en la parte 2 de esta convocatoria, a las que se aplica un plan de presentación continua. Las

propuestas se evaluarán por grupos en fechas predeterminadas. Las propuestas que se acojan a este sistema podrán presentarse en cualquier momento hasta la fecha de cierre del mismo.

2. El plan de acción para una Internet más segura se ejecuta a través de acciones indirectas con arreglo a lo previsto en los anexos I y III de la Decisión del Consejo.

Los criterios y modalidades de evaluación y selección se recogen en la parte 3 de la presente convocatoria.

Toda la información necesaria para preparar y presentar propuestas, así como la información relativa al proceso de evaluación, figura en la Guía del proponente ⁽³⁾. Esta documentación puede obtenerse, junto con el programa de trabajo y otros datos sobre esta convocatoria, solicitándola a una de las siguientes direcciones de la Comisión Europea:

Comisión Europea
Dirección General de Sociedad de la información
Plan de acción para una Internet más segura
Jean Monnet Building, Despacho EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
E-mail: iap@cec.eu.int
Fax (35-2) 430 13 40 79
Web: <http://europa.eu.int/iap>

3. Se invita a los interesados que reúnan las condiciones para participar en acciones indirectas dentro del plan de acción para una Internet más segura a que presenten propuestas sobre las partes del programa de trabajo que se citan más adelante.

Las propuestas que se presenten deberán corresponder al programa de trabajo 2003–2004 del plan de acción para una Internet más segura.

El presupuesto total indicativo de la contribución comunitaria disponible para esta convocatoria asciende a 11,7 millones de euros.

⁽¹⁾ DO L 33 de 6.2.1999, p. 1 (modificada por la Decisión nº 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, DO L 162 de 1.7.2003, p. 1).

⁽²⁾ <http://europa.eu.int/iap>

⁽³⁾ Ibid.

Parte 1 — Convocatoria de propuestas con plazo fijo

Fecha límite de recepción de propuestas: 14 de noviembre de 2003, a las 17.00 (hora local de Luxemburgo).

Línea de actuación 1: Creación de un entorno más seguro

Sublínea 1.1: Creación de una red europea de líneas directas

Referencia: AL 1.1. HOTCOORD

Existen líneas directas para informar sobre contenidos ilícitos y nocivos en 13 Estados miembros y en Islandia, constituyendo así una red de líneas directas de la UE. Para conseguir un máximo impacto y mejorar la eficacia operativa de la red, se asignará a la misma un nodo de coordinación. El coordinador elaborará una estrategia operativa a nivel europeo, así como directrices, métodos de trabajo y prácticas. La red debe trabajar en estrecho contacto con las acciones de sensibilización sobre una Internet más segura, aportar asistencia práctica a los países candidatos y establecer vínculos con líneas directas de fuera de Europa.

Sublínea 1.3: Sistema de etiqueta de calidad

Referencia: AL 1.3. QUALAB

Se promoverá un sistema de «etiquetas de sitio de calidad» para los proveedores de servicios de Internet que ayude a los usuarios a identificar a los proveedores adheridos a códigos de conducta ampliamente reconocidos junto con iniciativas de autorregulación que respalden la fiabilidad del autoetiquetado y servicios de auditoría de la justificación de las etiquetas de autocalificación.

Línea de actuación 2: Elaboración de sistemas de filtro y clasificación

Sublínea 2.1: Evaluación comparativa del software y servicios de filtrado

Referencia: AL 2.1. BENCH

El objetivo es aportar financiación para hacer posible una evaluación objetiva, independiente del fabricante y por expertos de los programas de filtrado disponibles actualmente y formular recomendaciones sobre futuros productos y líneas de investigación aplicada. Los trabajos se centrarán en la evaluación comparativa del software y los servicios de filtrado desde los puntos de vista del rendimiento, la utilidad, la resistencia al ataque informático y la adecuación a los usuarios europeos y a las nuevas formas de contenidos digitales.

Línea de actuación 3: Sensibilización

Sublínea 3.1: Establecimiento de una red europea de amplia base

Referencia: AL 3.1. AWARECOORD

La sensibilización es el complemento necesario de las líneas de actuación 1 y 2, ya que lo que se consiga en dichas

líneas sólo fructificará si es conocido por los usuarios reales y potenciales. Las acciones de sensibilización no se limitarán a la cuestión de los contenidos de la web considerados inadecuados para los niños, sino que pueden también incluir los contenidos nocivos tales como la xenofobia y nuevas formas de información y comunicación interactivas. Se financiará un nodo de coordinación que se encargará de la coordinación y el apoyo logístico de los nodos nacionales en general, garantizando una visibilidad elevada a nivel europeo de toda campaña de sensibilización efectiva realizada a nivel nacional.

Sublínea 3.2: Investigación aplicada para la educación sobre los medios

Referencia: AL 3.2. MEDIA

Se pretende llevar a cabo investigación aplicada en materia de educación sobre los medios en relación con la utilización de Internet y de las nuevas tecnologías por los niños, con el fin de descubrir modos educativos y tecnológicos de protegerlos. Los trabajos deben incluir la recogida y el análisis de los resultados y estudios existentes para distintos países y grupos de edades, así como el examen y la identificación de las percepciones, creencias, valores y comportamientos nacionales.

Parte 2 — Convocatoria de propuestas dentro del sistema de presentación continua

Primera fecha límite de recepción de propuestas: 14 de noviembre de 2003 a las 17.00 (hora local de Luxemburgo). Segunda fecha límite: 16 de marzo de 2004 a las 17.00 (hora local de Luxemburgo). Fecha límite final de recepción de propuestas: 15 de junio de 2004, a las 17.00 (hora local de Luxemburgo).

Línea de actuación 1: Creación de un entorno más seguro

Sublínea 1.1: Creación de una red europea de líneas directas

Referencia: AL 1.1 HOTLINE

Se solicitará a los nodos nacionales de las líneas directas que establezcan, si es necesario, y gestionen una línea directa para recibir información de la población en materia de contenidos ilícitos, informar a los usuarios de las actividades de la línea directa y de la manera de entrar en contacto con ella y dar una rápida respuesta a las quejas recibidas, de conformidad con las directrices sobre mejores prácticas elaboradas por la red. Se utilizará un conjunto normalizado de tareas e indicadores de rendimiento con el fin de garantizar la comparabilidad y simplificar la gestión del proyecto y la presentación de informes. Será imprescindible la participación activa en la red y las actividades transfronterizas.

Línea de actuación 3: Sensibilización

Sublínea 3.1: Creación de nodos nacionales de sensibilización

Referencia: AL 3.1 AWARENODE

Se espera que los nodos nacionales de sensibilización ideen una campaña de sensibilización coherente, impactante y bien orientada utilizando los medios de comunicación más adecuados, a la vista de las mejores prácticas y la experiencia de otros países. Los nodos nacionales deberán cooperar en el diseño y la aplicación de un enfoque europeo, adaptados según convenga a las preferencias lingüísticas y culturales de cada país.

Parte 3 — Criterios aplicables a todas las convocatorias de propuestas

En el proceso de evaluación se utilizarán los diversos criterios que a continuación se detallan:

Criterios de admisión

Véanse los criterios de admisión que se exponen en la Guía del proponente.

Criterios de selección

El objetivo de estos criterios es demostrar que los proponentes poseen fuentes estables y suficientes de financiación para mantener su actividad durante todo el período en que se lleve a cabo el proyecto. Los proponentes también deberán demostrar que cuentan con la competencia y las cualificaciones profesionales necesarias para llevar a término el proyecto propuesto.

Capacidad financiera y operativa para llevar a cabo el proyecto

- Capacidad para cofinanciar el proyecto propuesto, que habrá de demostrarse a través de la contabilidad del proponente.
- Capacidad para asignar recursos humanos adecuados a la realización del proyecto en cuestión.

Competencia y cualificaciones profesionales

Experiencia pertinente documentada en el campo del proyecto propuesto (p. ej., títulos académicos o proyectos anteriores).

Criterios de adjudicación

Estos criterios tienen por objeto evaluar la calidad de las propuestas presentadas en respuesta a la convocatoria. El procedimiento de adjudicación se describe pormenorizadamente en la Guía del proponente.

- Valor añadido europeo, sinergia de la red y contribución a los objetivos específicos de la línea de actuación: 40 %

— Calidad, relevancia e impacto: 30 %

— Asociación, recursos y gestión: 30 %

La Comisión podrá solicitar la ayuda de expertos externos para evaluar y aplicar los diversos criterios.

Calendario indicativo de la evaluación y la selección: los resultados de la evaluación se conocerán dos meses después de la correspondiente fecha límite de presentación de propuestas.

Parte 4 — Requisitos administrativos

4. Deberá hacerse llegar cualquier propuesta que responda a la presente convocatoria a la dirección de la Comisión que a continuación se indica por correo certificado, por servicio de mensajería o por entrega en mano. Para que una propuesta sea admisible, deberá presentarse en papel e ir firmada por las organizaciones proponentes, y la Comisión deberá recibirla en la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Sociedad de la Información
Plan de acción para una Internet más segura
Jean Monnet Building, Despacho EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

antes de que expire el plazo establecido ⁽¹⁾.

Se ofrece más información en la Guía del proponente.

Recordatorio: Téngase presente que los **plazos se aplican a la recepción por la Comisión**. Por otra parte, si no se utiliza la dirección exacta antes citada podrían producirse demoras en la recepción de una propuesta por el Plan de acción para una Internet más segura y, por consiguiente, podría no recibirse la propuesta antes de expirar el plazo establecido.

5. En toda la correspondencia relacionada con esta convocatoria (p. ej., cuando se solicite información o se presente una propuesta), será imprescindible citar la referencia de la parte correspondiente de la convocatoria.

Por el mero hecho de presentar una propuesta, los proponentes aceptan los procedimientos y condiciones indicados en la presente convocatoria y en los documentos a los que en ella se hace referencia.

Todas las propuestas recibidas por la Comisión Europea serán tratadas de manera absolutamente confidencial.

La Comunidad Europea aplica una política de igualdad de oportunidades; por ello, se alienta especialmente a las mujeres a presentar propuestas o a participar en su presentación.

⁽¹⁾ Si un servicio de mensajería solicita el número de teléfono del destinatario, utilícese (35-2) 430 13 29 63.

CORRECCIÓN DE ERRORES**Explotación de servicios aéreos regulares****Concurso concerniente a la explotación de servicios aéreos regulares entre Brive (Laroche) y París (Orly)**

(«Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas» n° C 201 de 26.8.2003 y S 162 de 26.8.2003, 148409-2003)

(2003/C 209/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mairie de Brive,
BP 433,
F-19312 Brive Cedex.
Tel.: (33) 5 55 92 39 39.
Fax: (33) 5 55 92 39 02.

En lugar de: 1. Introducción

...

Las normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio público se publicaron en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* n° C 304 de 30 de octubre del año 2001.

léase: 1. Introducción

...

Las normas correspondientes a dichas obligaciones de servicio público se publicaron en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* n° C 199 de 23 agosto de 2003.
